



Consejo de Seguridad

Distr. general
28 de abril de 2020
Español
Original: inglés

Carta de fecha 28 de abril de 2020 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur

Los miembros del Grupo de Expertos cuyo mandato se prorrogó en virtud de la resolución [2471 \(2019\)](#) del Consejo de Seguridad tienen el honor de transmitir adjunto el informe final, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución.

El informe fue presentado el 17 de marzo de 2020 al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2206 \(2015\)](#) relativa a Sudán del Sur, que lo examinó el 28 de abril de 2020.

El Grupo agradecería que la presente carta y el informe final se señalaran a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y se publicaran como documento del Consejo.

(Firmado) Emilio **Manfredi**
Coordinador del Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur

(Firmado) Laura **Bernal**
Experta

(Firmado) Mark **Ferullo**
Experto

(Firmado) Dean **Gillespie**
Experto

(Firmado) Andrei **Kolmakov**
Experto



Informe final del Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2471 (2019)

Resumen

La formación del Gobierno de Transición de Sudán del Sur en febrero de 2020 marcó un hito político. Si bien la paz en Sudán del Sur ha seguido siendo frágil, los signatarios del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur han logrado crear una breve oportunidad política para que los habitantes de Sudán del Sur que han sufrido las consecuencias del conflicto disfruten de los beneficios de la paz. Sin embargo, la competencia por el control de la seguridad a nivel local y nacional y por los recursos económicos siguen siendo factores persistentes, que continúan alejando al país de una paz sostenible.

La aplicación selectiva e incompleta de los compromisos de seguridad contraídos de conformidad con el acuerdo de paz revitalizado constituye una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de Sudán del Sur. En particular, los signatarios del acuerdo no han cumplido los plazos para la finalización de los arreglos transitorios de seguridad, incluido el rápido acantonamiento de las fuerzas y la formación, el adiestramiento y el redespigamiento de las fuerzas unificadas necesarias. En Unidad, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur y el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición practicaron el reclutamiento forzado de civiles, incluidos algunos niños, con el fin de aumentar el tamaño de sus fuerzas para su inclusión en el proceso de acantonamiento.

De forma simultánea a la aplicación del acuerdo de paz revitalizado, el Servicio Nacional de Seguridad ha ampliado el alcance de sus actividades de control de seguridad sin supervisión para silenciar la disidencia política y cívica. El Servicio Nacional de Seguridad ha detenido arbitrariamente a civiles en una prisión conocida como “Riverside” y ha cometido graves violaciones de los derechos humanos. El servicio de inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur ha llevado a cabo actividades violentas y extrajudiciales similares y, bajo la dirección del General de División Rin Tueny Mabor Deng, ha detenido, torturado y asesinado arbitrariamente a civiles en una prisión conocida como “Giada”.

En violación del embargo de armas, el Servicio Nacional de Seguridad, que no ha participado en el proceso de reunificación del ejército, recibió tres entregas de armas del Servicio de Inteligencia General del Sudán para reabastecer a sus fuerzas. La Oficina de Seguridad Interna del Servicio Nacional de Seguridad, bajo el mando del Teniente General Akol Koor Kuc, y el servicio de inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur también han reclutado, adiestrado y armado milicias separadas en Warrap y Lagos.

Las fuerzas armadas del Gobierno y de la oposición han seguido cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y utilizando métodos de guerra que contravienen el derecho internacional humanitario y el acuerdo de paz revitalizado. Por ejemplo, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur en Ecuatoria Central cometieron actos de violencia sexual y de género, ocuparon estructuras civiles, saquearon y quemaron propiedades y atacaron a trabajadores humanitarios. El país ha seguido estando muy militarizado y tanto el ejército como el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición no han abandonado las zonas civiles, lo que ha supuesto un riesgo para la estabilidad.

Los acuerdos políticos que condujeron al alto el fuego y al Gobierno de Transición han reducido los combates a gran escala, pero no han afrontado suficientemente las dimensiones económicas del conflicto. El sistema económico imperante no ha impedido de forma adecuada la mala asignación y el desvío de fondos

públicos, que amenaza con socavar las mejoras políticas y de seguridad. Por ejemplo, el órgano que supervisó el período previo a la transición, el Comité Nacional Previo a la Transición, no administró de manera transparente los fondos públicos asignados a la aplicación de la paz, ya que, por ejemplo, no dotó de recursos suficientes a los acantonamientos y centros de adiestramiento.

Sudán del Sur ha obtenido unos ingresos mensuales medios de 82 millones de dólares por la venta de su petróleo, que es, con mucho, el mayor recurso económico del país y un sector que ha sido objeto de irregularidades financieras. Un nuevo proceso de licitación abierta aprobado a mediados de 2019 no ha aumentado la transparencia de la gestión y venta del petróleo del país, como se requería en el capítulo 4 del acuerdo de paz revitalizado. El Servicio Nacional de Seguridad se ha beneficiado de los ingresos del petróleo a través de sus empresas, incluida la compañía Sudd (Suud) Security Services Co. Ltd., que ha recibido pagos por servicios en los campos petrolíferos. Además, el Servicio Nacional de Seguridad y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur han recibido donaciones en especie por proteger los campos petrolíferos, que constituyen considerables pagos no monetarios y de carácter extrapresupuestario.

Durante los años de conflicto, la falta de reglamentación administrativa y de gestión transparente de los recursos del país ha permitido la extracción y explotación ilícitas de los recursos naturales del país. En Ecuatoria Oriental, la administración local de Kapoeta ha permitido que una serie de mineros, la mayoría de los cuales carecen de licencia, extraigan oro mediante el uso ilegal de equipo industrial. En otras partes de Ecuatoria Oriental, se ha pagado a los militares para que protejan el transporte de madera talada ilegalmente. Por ejemplo, Lucky Friends Trading and Construction Company Ltd. ha contratado la protección de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur para sus actividades de tala ilegal.

La comunidad internacional encabezó una compleja y polifacética campaña de presión diplomática que dio lugar a la formación del Gobierno de Transición y ha permitido que los signatarios continúen el diálogo. El enfoque inclusivo de la política nacional se ha puesto en práctica principalmente fuera de los plazos y el marco que se convinieron en el acuerdo de paz revitalizado. Este enfoque, hasta el momento, no ha cumplido las disposiciones del acuerdo sobre la necesidad crítica de reformas estructurales de las instituciones públicas, la reconstrucción de un tejido social devastado, la obligación de rendir cuentas de las actividades financieras y la justicia. Si no se producen estas reformas, los millones de habitantes de Sudán del Sur que huyeron de sus hogares no se sentirán suficientemente seguros como para volver.

Los Estados vecinos han incumplido sistemáticamente el acuerdo de paz revitalizado y el régimen de sanciones del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, las entidades aduaneras respectivas de los Estados de la región no han transmitido ningún informe de inspección al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2206 \(2015\)](#) relativa a Sudán del Sur, lo que ha frustrado los esfuerzos por asegurar un compromiso pleno con el embargo de armas. Los principales garantes del acuerdo, el Sudán y Uganda, han violado el embargo de armas. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda han mantenido una presencia en Ecuatoria Central y el Servicio de Inteligencia General del Sudán ha enviado armas a Sudán del Sur.

El apoyo generalizado a la paz en Sudán del Sur no ha dado lugar al cumplimiento de las disposiciones del acuerdo de paz revitalizado. Sin embargo, si las partes aplicasen plenamente el acuerdo, sus disposiciones detalladas permitirían hacer frente a los factores que impulsan el conflicto, entre ellos el retraso en la justicia y la rendición de cuentas, la violencia empleada sin supervisión por las fuerzas de seguridad para lograr objetivos políticos y un sistema económico que ha permitido la malversación y el desvío de fondos públicos y recursos naturales.

Índice

	<i>Página</i>
Abreviaciones	6
I. Antecedentes	7
A. Mandato y viajes	7
B. Cooperación con Estados Miembros, organizaciones internacionales y otros interesados	7
C. Metodología y formato	8
II. Seguridad y derechos humanos: amenazas para la población civil, violaciones y dinámica de los conflictos	8
A. Los arreglos de seguridad no aplicados son una amenaza para los civiles	9
B. Reclutamiento forzado, incluso de niños, en Unidad	11
C. Graves violaciones de los derechos humanos por el Servicio Nacional de Seguridad y el servicio de inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur	12
D. Reclutamiento, adiestramiento y armamento de milicias	14
E. Violación del embargo de armas por el Servicio Nacional de Seguridad	15
F. Violaciones del acuerdo de cese de las hostilidades y del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos	16
G. Desplazamiento forzoso, violencia sexual y de género y ataques contra civiles en Ecuatoria Central	16
H. Violaciones graves de los derechos humanos, incluida la violencia sexual y de género, en Maiwut	19
I. Riesgos para la seguridad relacionados con la militarización de zonas civiles y la proliferación de armas	20
III. Finanzas y recursos naturales: riesgos de explotación ilícita y malversación de recursos públicos	21
A. Riesgos de malversación de los recursos públicos asignados al Comité Nacional Previo a la Transición	22
B. Riesgos de malversación de fondos públicos procedentes de la venta de petróleo	25
C. Riesgo de desvío de fondos públicos procedentes de la producción de petróleo y sus ingresos	26
D. Recursos públicos no contabilizados mediante la asistencia en especie a las fuerzas de seguridad	28
E. Ingresos independientes vulnerables ante el uso indebido por el Servicio Nacional de Seguridad	29
F. Extracción ilícita de oro	30
G. Uso ilegal de equipos industriales y mineros sin licencia en Ecuatoria Oriental	31
H. Explotación y comercio ilegales de madera en Ecuatoria Oriental	33
I. Tala ilícita: el ejemplo de Lucky Friends Trading and Construction Company	35

IV.	Información política actualizada: perspectivas de una paz duradera y la función de la región.	36
A.	Compromiso diverso con la aplicación de la paz e iniciativas internacionales	36
B.	Violación del embargo de armas por el ejército de Uganda	37
C.	Mediación política y violación del embargo de armas por el Sudán.	37
D.	Riesgos relacionados con el número de estados y sus límites.	38
E.	Causas estructurales del conflicto que aún no se han afrontado	39
V.	Aplicación de la congelación de activos y la prohibición de viajar	40
VI.	Recomendaciones	41
VII.	Anexos*	43
	Anexo 1: Map showing the route between Bentiu Protection of Civilians Site (PoC) and Dhorbor (SPLA IO HQ).	43
	Anexo 2: Riverside facility operated by NSS	44
	Anexo 3: Abuses and actions contrary to the R-ARCSS by the SSPDF MI.	45
	Anexo 4: Violations of the ceasefire in Maiwut county	49
	Anexo 5: Satellite imagery showing seven of the eight damaged Mi-24s stored at the SSPDF general headquarters, known as Bilpham	59
	Anexo 6: Third allotment of additional \$40 million transferred to the NPTC	60
	Anexo 7: Rome Declaration on the Peace Process in South Sudan, Rome, Italy, 12 January 2020	61

* Los anexos se distribuyen únicamente en el idioma en que fueron presentados y sin revisión editorial.

Abreviaciones

ELPS-O	Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición
F/EUSS	Frente/Ejército Unido de Sudán del Sur
Facción de Abdelaziz al-Hilu del MLPS-N	Facción de Abdelaziz al-Hilu del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte
FDPSS	Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur
FSN	Frente de Salvación Nacional
IGAD	Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
M/ELPS-O	Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición
MLPS-AD	Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Antiguos Detenidos
MLPS-O	Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición
ONG	Organización no gubernamental
UNMISS	Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur

I. Antecedentes

A. Mandato y viajes

1. En su resolución 2206 (2015), el Consejo de Seguridad impuso un régimen de sanciones que se aplicarían a las personas y entidades designadas por contribuir al conflicto en Sudán del Sur y un comité de sanciones (el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) relativa a Sudán del Sur). El 1 de julio de 2015, el Comité designó a seis personas que serían objeto de sanciones selectivas. Con la aprobación de su resolución 2428 (2018), el Consejo impuso un embargo de armas en el territorio de Sudán del Sur y añadió dos personas a la lista de sanciones. El 30 de mayo de 2019, el Consejo aprobó su resolución 2471 (2019), por la que prorrogaba el régimen de sanciones hasta el 31 de mayo de 2020.

2. En su resolución 2471 (2019), el Consejo de Seguridad también prorrogó el mandato del Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur hasta el 30 de junio de 2020 para que proporcionase información y análisis en apoyo de la labor del Comité; por ejemplo, en lo relativo a la posible designación de personas y entidades que podrían participar en las actividades descritas en los párrafos 13 a 15 de su resolución 2428 (2018) y reafirmadas en su resolución 2471 (2019), entre otras cuestiones.

3. El Secretario General, en consulta con el Comité, designó a los cinco miembros del Grupo de Expertos (véanse S/2019/544 y S/2019/896): una experta en asuntos humanitarios (Laura Bernal), un experto en recursos naturales (Mark Ferullo), un experto en armas (Dean Gillespie), un experto en finanzas (Andrei Kolmakov) y un experto en grupos armados y cuestiones regionales (Emilio Manfredi). El Sr. Manfredi fue designado coordinador del Grupo de Expertos.

4. Desde agosto de 2019, los miembros del Grupo de Expertos han viajado a los Estados Unidos de América, Etiopía, Italia, Kenya, el Sudán, Sudán del Sur, Suiza y Uganda.

B. Cooperación con Estados Miembros, organizaciones internacionales y otros interesados

5. Si bien el Grupo de Expertos funciona independientemente de los organismos e instituciones de las Naciones Unidas, desea expresar su agradecimiento a la UNMISS por su apoyo sobre el terreno y a otros funcionarios de las Naciones Unidas, en particular en Nueva York.

6. En el curso de su labor, el Grupo de Expertos se reunió con representantes del Ministerio de Defensa y Asuntos de Veteranos, el Ministerio de Información, Tecnología de la Comunicación y Servicios postales, el Ministerio de Finanzas y Planificación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Ministerio del Petróleo, el Ministerio de Minería y el Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Sudán del Sur, el Jefe de Estado Mayor de las FDPSS, representantes del Banco de Sudán del Sur y el Presidente del Órgano Legislativo Nacional de Transición.

7. El Grupo de Expertos celebró amplias consultas con Estados Miembros y organizaciones regionales y subregionales, así como con la UNMISS, en cumplimiento de su mandato, cuya importancia se destaca en el párrafo 18 de la resolución 2428 (2018), prorrogado en la resolución 2471 (2019).

8. El Grupo de Expertos se ha reunido con órganos y organismos de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y otros lugares. El Grupo de Expertos también celebró consultas con el Mecanismo de Vigilancia y Verificación del Alto el Fuego y los

Arreglos Transitorios de Seguridad y la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur.

C. Metodología y formato

9. El presente informe se preparó sobre la base de las investigaciones realizadas por el Grupo de Expertos y de un examen de la documentación facilitada por el Gobierno de Sudán del Sur, otros Estados Miembros, entidades regionales, organizaciones internacionales y entidades comerciales. El informe también se basa en la labor anterior del Grupo de Expertos, incluidos los informes anteriores al Consejo de Seguridad y al Comité, tanto públicos como confidenciales, cientos de entrevistas e información digna de crédito obtenida de muy diversas fuentes.

10. El Grupo de Expertos cumplió las normas recomendadas por el grupo de trabajo oficioso del Consejo de Seguridad sobre cuestiones generales relativas a las sanciones (S/2006/997), que requieren utilizar documentos auténticos verificados, pruebas concretas y observaciones *in situ* de los expertos. El Grupo de Expertos corroboró la información contenida en el presente informe con ayuda de múltiples fuentes independientes a fin de ajustarse a los criterios probatorios apropiados.

11. El Grupo de Expertos llevó a cabo su investigación con la mayor transparencia posible, a la vez que acordó carácter prioritario a la confidencialidad cada vez que fue necesario. Una fuente, documento o localidad se califica de confidencial cuando su divulgación podría poner en peligro la seguridad de la fuente.

12. El informe está estructurado en seis secciones. En la primera sección se ofrece la introducción y, en la segunda, una visión general de las cuestiones de seguridad, incluidos los conflictos en curso y las violaciones comprobadas de los derechos humanos, el derecho humanitario y el embargo de armas. La tercera sección se centra en los factores económicos relacionados con la paz y la seguridad de Sudán del Sur, como los riesgos de malversación de fondos y explotación ilícita de los recursos naturales. En la cuarta sección se describe el papel de la región en el proceso de paz y los riesgos que amenazan la aplicación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur. Por último, tras un examen de la congelación de activos y la prohibición de viajar, el Grupo de Expertos ha formulado varias recomendaciones, que se ofrecen en la sexta sección.

II. Seguridad y derechos humanos: amenazas para la población civil, violaciones y dinámica de los conflictos

13. El 21 de febrero de 2020, el Presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, disolvió el Gobierno y nombró Vicepresidente primero al Presidente del M/ELPS-O, Riek Machar Teny. Con la toma de posesión de sus cargos por el Sr. Machar y cuatro Vicepresidentes —Taban Deng Gai, James Wani Igga, Rebecca Nyandeng De Mabior y Hussein Abdelbagi Ayii Akol—, el Sr. Kiir dio inicio a la formación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado y al Período de Transición de 36 meses, que culminará con la celebración de elecciones nacionales, de conformidad con el artículo 1.1.5 del acuerdo de paz revitalizado¹.

¹ El Presidente también volvió a nombrar a dos aliados suyos de larga data para que desempeñaran puestos clave: Tut Kew Gatluak, Asesor de Asuntos de Seguridad Nacional, y Mayiik Ayii Deng, Asesor de Asuntos Presidenciales. Véase Radio Tamazuj, “Kiir dissolves entire government, appoints new VPs”, 21 de febrero de 2020.

14. El Gobierno de Transición se formó al margen del marco del acuerdo de paz revitalizado, cuando los signatarios llegaron a una solución de compromiso sobre la cuestión del número de estados y sus límites, volviendo de 32 a 10 estados, más tres zonas administrativas². El Grupo de Expertos observa, sin embargo, que la larga demora en resolver la cuestión de los estados fue solo una de las muchas disposiciones obligatorias que los signatarios no abordaron durante el período de ocho meses previo a la transición y sus dos prórrogas. Durante este período, los signatarios, —y el Gobierno en particular—, no demostraron suficiente voluntad política, confianza y sentido de urgencia para adherirse a las disposiciones clave del acuerdo con el fin de allanar el camino para las reformas esenciales destinadas a poner los intereses del pueblo de Sudán del Sur en el centro del proceso de paz.

15. La ejecución selectiva e incompleta de esas tareas previas a la transición ha sido una amenaza persistente para la paz, la seguridad y la estabilidad de Sudán del Sur, ya que muchas de las disposiciones fundamentales previas a la transición han quedado pendientes. Entre ellas, cabe mencionar una enmienda constitucional destinada a incorporar el acuerdo de paz revitalizado a la Constitución de Transición (art. 1.18.1.1); la reconstitución del Consejo de los Estados (art. 1.15.13); y los arreglos de seguridad previos a la transición y la formación, adiestramiento y redespliegue de las fuerzas unificadas necesarias (arts. 1.4.3.4 y 2.2).

A. Los arreglos de seguridad no aplicados son una amenaza para los civiles

16. Sobre la base de conversaciones con representantes políticos y militares de los signatarios del acuerdo de paz revitalizado, incluidas las FDPSS, el Grupo de Expertos evalúa que la creación de unas fuerzas unificadas necesarias con 83.000 efectivos está incompleta³. El 12 de febrero de 2020, un documento del Comité Mixto encargado de los Arreglos Transitorios de Seguridad examinado por el Grupo de Expertos indicó que el total de soldados de las fuerzas unificadas necesarias presentes en 17 de los 18 centros de adiestramiento establecidos ascendía a 45.436 soldados, es decir, poco más de la mitad de la fuerza total de 83.000 soldados especificada en el acuerdo. Los soldados de las FDPSS que estaban presentes en los centros de formación constituían un porcentaje del total de las fuerzas unificadas necesarias significativamente menor que el correspondiente a los soldados de la oposición⁴.

17. Según múltiples testimonios corroborados, tanto de las FDPSS como del M/ELPS-O, muchos comandantes clave habían indicado a sus fuerzas que permanecieran fuera del proceso de reunificación de la seguridad, conservaran sus armas y se prepararan para volver a participar en combates activos, en contra de lo dispuesto en los artículos 2.2.2 y 2.2.3.3 del acuerdo de paz revitalizado⁵. Además, las FDPSS no han recogido las armas pesadas de largo y mediano alcance (art. 2.2.3.2) ni han facilitado mapas que detallen la ubicación, el tamaño y el armamento de sus fuerzas (art. 2.2.3.4), lo que crea dudas sobre su voluntad de reintegrar

² A saber, Abiey, Ruweng y Pibor. Entrevistas con representantes del Gobierno, la sociedad civil y fuentes confidenciales, en Yuba, Yei, Nairobi y Kampala, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

³ Entrevistas con los comandantes de las FDPSS y el M/ELPS-O, representantes de los mecanismos de seguridad, personal de la UNMISS y fuentes confidenciales, en Yuba, Nairobi y Kampala y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

⁴ Documento que obra en poder del Grupo de Expertos. Funcionarios de diferentes mecanismos de seguridad mostraron al Grupo de Expertos documentos confidenciales que indicaban números más bajos. Entrevistas con representantes de los mecanismos de seguridad en Yuba, febrero de 2020.

⁵ Entrevistas con oficiales del ELPS-O, las FDPSS y el Servicio Nacional de Seguridad, personal de la UNMISS y fuentes confidenciales, en Yuba, Kampala y Nairobi y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

verdaderamente las fuerzas⁶. El Grupo de Expertos observa que una dinámica similar, provocada por la lentitud del proceso de integración, precipitó el colapso del acuerdo de paz de agosto de 2015 y la reanudación del conflicto en julio de 2016 (véase [S/2016/793](#)).

18. El proceso de selección e integración de la seguridad ha sido defectuoso. La ausencia de procedimientos de selección biométrica y el número insuficiente de formularios de registro distribuidos en los acantonamientos y cuarteles han contribuido a que el proceso sea lento y desorganizado. Por ejemplo, el Grupo de Expertos ha corroborado que algunas personas cuyos nombres figuraban en los registros no existían. En otros casos, algunos civiles se sumaron al proceso de acantonamiento con la esperanza de alcanzar ciertos rangos y recibir los beneficios económicos asociados, como sueldos y pensiones⁷.

19. En cuanto a las fuerzas de oposición verificadas que se registraron en los acantonamientos, muchos soldados abandonaron esos acantonamientos. En algunos casos, los soldados de la oposición se retiraron debido a la falta de servicios, incluidas las instalaciones básicas y la alimentación. En otros casos, las fuerzas carecían de compromiso político con el proceso de reunificación de la seguridad⁸. Además, el Grupo de Expertos ha corroborado que la mayoría de los miembros de las FDPSS designados para el acantonamiento no se habían trasladado a los acantonamientos, sino que habían permanecido alojadas en cuarteles u otros puestos de avanzada en todo el país⁹.

20. En noviembre de 2019, a pesar de las dificultades del proceso de acantonamiento, la Junta Mixta de Defensa ordenó a todas las fuerzas que se dirigieran a los centros de adiestramiento¹⁰. Sin embargo, los representantes de la Junta y otros órganos de seguridad de transición dijeron al Grupo de Expertos que, al igual que los acantonamientos, los centros de adiestramiento carecían de capacidades básicas de selección y de instalaciones esenciales¹¹. Además, el adiestramiento de las fuerzas unificadas necesarias se ha dedicado a la orientación moral básica, más que a la instrucción militar sustantiva¹².

21. En el acuerdo de paz revitalizado se establece que los grupos armados del país deben garantizar el estado de derecho, rendir cuentas a la población, volver a abrir el espacio político y cívico, y proporcionar la seguridad necesaria para que la población civil dentro y fuera del país pueda regresar a sus hogares. El Grupo de Expertos observa, por consiguiente, que el hecho de que los signatarios no hayan aplicado los arreglos de seguridad previos a la transición ni hayan llevado a cabo la formación, adiestramiento y red despliegue de las fuerzas unificadas necesarias, con arreglo a los artículos 1.4.3.4 y 2.2 del acuerdo, constituye una amenaza inmediata para el

⁶ Entrevistas con fuentes confidenciales en Yuba, enero y febrero de 2020.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Entrevistas con los comandantes de las FDPSS, representantes de los mecanismos de seguridad, personal de la UNMISS y fuentes confidenciales, en Yuba, Nairobi y Kampala y por teléfono, enero y febrero de 2020.

¹⁰ Entrevistas con representantes de los mecanismos de seguridad y fuentes confidenciales, en Yuba y Nairobi y por teléfono, enero y febrero de 2020.

¹¹ Como la comida, la vivienda, los baños y el apoyo médico. Entrevistas con representantes de los mecanismos de seguridad y fuentes confidenciales, en Yuba y Nairobi y por teléfono, enero y febrero de 2020. Véase Priscah Akol, "Hunger drives away peace soldiers from Wau training center", Eye Radio, 10 de marzo de 2020.

¹² La marcha y las canciones han sido las principales actividades. Entrevistas con representantes de los mecanismos de seguridad y personal de la UNMISS, el Mecanismo de Vigilancia y Verificación del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad y las organizaciones no gubernamentales internacionales, en Yuba y Nairobi y por teléfono, enero y febrero de 2020.

Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado y la seguridad de una población civil ya de por sí vulnerable.

B. Reclutamiento forzado, incluso de niños, en Unidad

22. Desde su establecimiento en 2015, el Grupo de Expertos ha documentado el reclutamiento forzado de niños y adultos en Sudán del Sur (véanse [S/2016/70](#), [S/2019/301](#) y [S/2019/897](#)). Mediante sus investigaciones, el Grupo de Expertos ha confirmado que la práctica no ha disminuido y que tanto las FDPSS como el ELPS-O han tomado como objetivo el reclutamiento de niños y jóvenes. En Unidad, ambas fuerzas han realizado reclutamientos forzados para aumentar el número de sus soldados en los acantonamientos y centros de adiestramiento. El Grupo de Expertos constató que el reclutamiento había aumentado drásticamente en enero y febrero de 2020, antes de que finalizara la prórroga de 100 días del período previo a la transición¹³.

23. Durante una visita a Unidad en febrero de 2020, el Grupo de Expertos encontró pruebas de reclutamiento forzado por parte de las FDPSS y el ELPS-O de niños de tan solo 12 años y adultos jóvenes, de entre 18 y 27 años, en los condados de Koch, Panyijiar, Rubkona y Mayendit¹⁴. El Grupo de Expertos confirmó que los siguientes comandantes habían ordenado y gestionado personalmente el reclutamiento forzado: el General de Brigada James Galiak Kai, de la División 4 de las FDPSS controladas por el Vicepresidente Taban Deng Gai en Kuerguini¹⁵, y el General de División Turuk Khor, de la División 4A del ELPS-O en aldeas de los alrededores de Dingding, incluidas Kuach y Juach, así como en Nhialdu y Rubkona¹⁶.

24. Como resultado de esta amplia campaña de reclutamiento, los niños y jóvenes han evitado transitar entre el emplazamiento de protección de civiles de Bentiu y Dhorbor, el cuartel general del ELPS-O en la zona (véase el anexo 1)¹⁷. El Grupo de Expertos corroboró que los jóvenes de esas zonas se habían trasladado al emplazamiento de protección de civiles para evitar ser secuestrados y llevados al centro de adiestramiento de Moum¹⁸. Los entrevistados destacaron que tenían miedo de abandonar el emplazamiento, que consideraban el único lugar seguro de la zona¹⁹.

25. Además, los familiares de civiles secuestrados comunicaron al Grupo de Expertos que se sentían inseguros en sus propias aldeas y que habían considerado la posibilidad de trasladarse, o regresar en algunos casos, al emplazamiento de protección de civiles²⁰. Varias víctimas y familiares explicaron al Grupo de Expertos que los soldados del ELPS-O bajo el mando del General de División Khor los habían

¹³ Entrevistas con la sociedad civil, líderes comunitarios, víctimas y fuentes confidenciales, en el emplazamiento de protección de civiles de Bentiu, Dhorbor, Dingding, Leer, el centro de adiestramiento de Moum y el mercado de Rubkona, febrero de 2020.

¹⁴ *Ibid.* Véase el anexo confidencial 1; los anexos confidenciales solo se proporcionan a los miembros del Comité establecido en virtud de la resolución [2206 \(2015\)](#) relativa a Sudán del Sur.

¹⁵ Estas fuerzas están oficialmente integradas en las FDPSS, pero aún mantienen una estructura de mando separada. Véanse [S/2019/301](#) y el anexo 1 de este informe.

¹⁶ Entrevistas con la sociedad civil, líderes comunitarios, víctimas y familiares, y fuentes confidenciales, en el emplazamiento de protección de civiles de Bentiu, Dhorbor, Dingding, Leer, el centro de adiestramiento de Moum y el mercado de Rubkona, febrero de 2020.

¹⁷ Visita del Grupo de Expertos a Unidad, febrero de 2020.

¹⁸ Entrevistas con fuentes confidenciales, en un lugar no revelado, febrero de 2020.

¹⁹ Entrevistas con oficiales de las FDPSS y el ELPS-O, la sociedad civil, líderes comunitarios, víctimas y familiares, y fuentes confidenciales, en el emplazamiento de protección de civiles de Bentiu, Dhorbor, Dingding, Leer, el centro de adiestramiento de Moum y el mercado de Rubkona, febrero de 2020.

²⁰ *Ibid.*

amenazado²¹. Entre las personas que fueron entrevistadas por el Grupo de Expertos, una explicó que, si huían, obligarían a sus familias a entregar vacas o cabras y, por lo tanto, tenían que quedarse²², mientras que otra señaló que les habían dicho que, si su hijo se atrevía a escapar, volverían para llevarse sus cabras²³.

26. De acuerdo con la información recopilada en múltiples entrevistas realizadas, el Grupo de Expertos encontró que las FDPSS y el ELPS-O habían utilizado métodos similares en sus campañas de secuestros. En la mayoría de los casos, durante el día llegaban a las aldeas camionetas con hombres armados y desarmados, algunos con uniforme, que detenían a los niños y jóvenes y los obligaban a subir a las camionetas. Después, llevaban a los reclutas forzados al cuartel general de las FDPSS o del ELPS-O y posteriormente los trasladaban al centro de adiestramiento de Moum²⁴. Una víctima explicó al Grupo de Expertos que lo habían capturado y arrojado a un camión con al menos dos niños y otros diez adultos. Según la víctima, que luego había escapado, las FDPSS habían llevado a los secuestrados al cuartel de la División 4 en Rubkona²⁵. Otros incidentes habían ocurrido de noche, cuando hombres armados y desarmados, algunos vestidos de uniforme, habían obligado a jóvenes a entrar en los vehículos²⁶.

27. Las FDPSS y el ELPS-O negaron que estuvieran realizando reclutamientos forzados en Unidad. El General de División Khor del ELPS-O y el General de Brigada Peter Malith de las FDPSS negaron por separado haber secuestrado a civiles. El General de Brigada Malith indicó al Grupo de Expertos que tanto las FDPSS como el ELPS-O simplemente recogían a los soldados que estaban fuera de los cuarteles²⁷. El Grupo de Expertos observa que ni el Sr. Khor ni el Sr. Malith han mantenido una lista de soldados bajo su mando, lo que ha hecho difícil determinar el tamaño de los grupos armados e impedido la verificación de los soldados reclutados por la fuerza. Asimismo, el Grupo de Expertos observa que, habida cuenta de los métodos inadecuados de identificación de los soldados, en caso de duda y de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, dichos soldados deben ser liberados y tratados como civiles²⁸.

C. Graves violaciones de los derechos humanos por el Servicio Nacional de Seguridad y el servicio de inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur

28. A pesar de las disposiciones del acuerdo de paz revitalizado, el Gobierno ha mantenido un espacio cívico y político cerrado y el Presidente, Salva Kiir, no ha mostrado ninguna intención de restringir las facultades de seguridad no supervisadas del Servicio Nacional de Seguridad y del servicio de inteligencia militar de las FDPSS²⁹.

²¹ Entrevistas con víctimas y familiares en el mercado de Rubkona y en el emplazamiento de protección de civiles de Bentiu, febrero de 2020.

²² Entrevista con un familiar de una víctima, en Unidad, febrero de 2020.

²³ Entrevistas con una víctima, en Unidad, febrero de 2020.

²⁴ Entrevistas con oficiales de las FDPSS y el ELPS-O, la sociedad civil, líderes comunitarios, víctimas y familias, y fuentes confidenciales, en el emplazamiento de protección de civiles de Bentiu, Dhorbor, Dingding, Leer, el centro de adiestramiento de Moum y el mercado de Rubkona, febrero de 2020.

²⁵ Entrevistas con una víctima, en lugares no revelados, febrero de 2020.

²⁶ Entrevistas con la sociedad civil, líderes comunitarios, víctimas y familias, y fuentes confidenciales, en el emplazamiento de protección de civiles de Bentiu, Dhorbor, Dingding, Leer, el centro de adiestramiento de Moum y el mercado de Rubkona, febrero de 2020.

²⁷ Reuniones con el General de División Khor en Dingding y el General de Brigada Malith en el centro de adiestramiento de Moum, 12 y 13 de febrero de 2020, respectivamente.

²⁸ Véase el Convenio de Ginebra relativo al Trato debido a los Prisioneros de Guerra, artículo 3.

²⁹ Entrevistas con personal del sector de la seguridad y fuentes confidenciales, en Yuba y lugares no revelados y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

En enero de 2020, el Sr. Kiir indultó y puso en libertad al activista de derechos humanos encarcelado Peter Biar Ajak, al empresario Kerbino Wol Agok y a otros 28 detenidos mediante un decreto presidencial³⁰. Sin embargo, según la información obtenida por el Grupo de Expertos, otros prisioneros políticos permanecen bajo la custodia del Servicio Nacional de Seguridad y el servicio de inteligencia militar de las FDPSS, sin las debidas garantías procesales y en violación del artículo 2.1.6 del acuerdo, que dispone la liberación, bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja, de todos los prisioneros de guerra y detenidos³¹.

29. El Grupo de Expertos informó anteriormente (véanse [S/2019/301](#) y [S/2019/897](#)) de que el Servicio Nacional de Seguridad, en particular a través de su Oficina de Seguridad Interna, había actuado al margen del estado de derecho y de las estructuras oficiales del Estado. El Grupo de Expertos corroboró que el Servicio Nacional de Seguridad y el servicio de inteligencia militar de las FDPSS habían realizado actividades extrajudiciales que contravenían abiertamente el acuerdo de paz revitalizado y constituían una amenaza para la paz y la seguridad en Sudán del Sur³².

30. El Director General de la Oficina de Seguridad Interna, Teniente General Akol Koor Kuc, y el jefe del servicio militar de inteligencia de las FDPSS, General de División Rin Tueny Mabor Deng, conocido como “Janafil”, emitieron órdenes directas de suprimir las voces disidentes al margen del debido procedimiento legal, incluso mediante detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de supuestos opositores³³. En particular, el Grupo de Expertos verificó que el Servicio Nacional de Seguridad y el servicio de inteligencia militar de las FDPSS habían gestionado prisiones en Yuba en las que sus fuerzas habían cometido violaciones generalizadas de los derechos humanos.

31. Como ya informó anteriormente el Grupo de Expertos (véase [S/2019/301](#)), el Servicio Nacional de Seguridad ha mantenido un centro de detención en su cuartel general, comúnmente conocido como la “Casa Azul”, para su programa de detención ilegal. Además, el Grupo de Expertos verificó la existencia de otros centros de detención oficiales y oficiosos controlados por la Oficina de Seguridad Interna en todo Sudán del Sur³⁴.

32. El Grupo de Expertos corroboró la existencia de un segundo centro de detención de la Oficina de Seguridad Interna en Yuba, conocido como “Riverside”. El centro está situado dentro del cuartel general de la División de Operaciones de la Oficina, bajo el mando del General de División Achieh Kuot³⁵. El Comandante Wol Dhel Thong es el

³⁰ Entrevistas con la sociedad civil, personal de organizaciones no gubernamentales y fuentes confidenciales, en Yuba y por teléfono, enero de 2020. Véase Sudan Tribune, “S. Sudan’s Kiir pardons activist Peter Biar, 29 other prisoners”, 2 de enero de 2020.

³¹ Entrevistas con la sociedad civil, personal de organizaciones no gubernamentales y fuentes confidenciales, en Yuba, Nairobi y Kampala y por teléfono, enero y febrero de 2020.

³² Entrevistas con operativos del servicio de inteligencia militar de las FDPSS y el Servicio Nacional de Seguridad, oficiales de alto rango del sector de seguridad, la sociedad civil, líderes comunitarios y fuentes confidenciales, en lugares no revelados, agosto de 2019 a febrero de 2020.

³³ *Ibid.*

³⁴ El Grupo de Expertos corroboró la existencia de varios centros de detención ubicados en las oficinas del Servicio Nacional de Seguridad de Yuba y otras ciudades, y de pisos francos para realizar interrogatorios, detenciones y torturas. Entrevistas con oficiales del sector de la seguridad y fuentes confidenciales, en lugares no revelados, agosto de 2019 a febrero de 2020.

³⁵ Riverside se encuentra en el río Nilo, entre las instalaciones de inmigración y de la policía. Este centro también alberga a la fuerza de “operaciones especiales” de la División, comandada por el General de Brigada Deng Kuac. Este escuadrón es responsable de operaciones extrajudiciales encubiertas, como secuestros, torturas y asesinatos de individuos considerados una amenaza para la Oficina de Seguridad Interna. Estas operaciones se ejecutan bajo las órdenes directas del Director General de la Oficina.

oficial a cargo del centro de detención³⁶. El Grupo de Expertos verificó que el centro había llegado a albergar 40 detenidos a la vez. Según la información obtenida por el Grupo de Expertos, ningún detenido de Riverside ha sido acusado de un delito penal y no existe un registro que enumere a los detenidos³⁷.

33. De acuerdo con la información procedente de diversas fuentes familiarizadas con las operaciones en Riverside, los detenidos han sido golpeados y torturados, y a veces obligados a pagar un rescate a los funcionarios de la Oficina de Seguridad Interna para ser liberados³⁸. El Grupo de Expertos confirmó que, como resultado de las condiciones en el centro o de la tortura, varios detenidos habían muerto en Riverside durante el período al que se refiere el informe (véase el anexo 2).

34. De forma separada, siguiendo las órdenes directas del General de División Tueny, los oficiales del servicio de inteligencia militar de las FDPSS detuvieron ilegalmente a docenas de civiles. Los oficiales detuvieron a civiles a los que acusaban de apoyar a grupos de la sociedad civil que criticaban al Gobierno o que apoyaban a las fuerzas de la oposición, como el FSN, el F/EUSS o el M/ELPS-O. Según múltiples testimonios corroborados, el servicio de inteligencia militar secuestró ilegalmente a civiles en la calle o en hoteles de Yuba y otros lugares de Sudán del Sur. Además, el servicio de inteligencia militar detuvo extrajudicialmente a soldados del ELPS-O desplegados en Yuba y en otros lugares para participar en los arreglos de seguridad de transición que se disponían en el acuerdo de paz revitalizado³⁹.

35. El Grupo de Expertos corroboró que el servicio de inteligencia militar de las FDPSS había internado a la mayoría de los civiles y soldados del ELPS-O detenidos en un centro de detención en la sección reservada al servicio de inteligencia militar en los cuarteles del ejército en Yuba, conocido localmente como “Giada”⁴⁰. El servicio de inteligencia militar no mantenía una lista de detenidos y no había presentado cargos contra los detenidos ni tampoco les había hecho comparecer ante un juez ni permitido tener acceso a un abogado⁴¹.

D. Reclutamiento, adiestramiento y armamento de milicias

36. Durante el período que se examina, el Teniente General Kuc y el General de División Tueny continuaron reclutando, adiestrando y armando a sus fuerzas, en violación del artículo 2.1.8 del acuerdo de paz revitalizado y en clara violación de los arreglos de seguridad previos a la transición (art. 2.2). El Grupo de Expertos corroboró que el General de División Tueny había reclutado, adiestrado y armado a una milicia de más de 1.500 jóvenes de los campamentos de ganado de las zonas de Adior y Wunthou (Lagos) (véase el anexo 3). De forma similar, el Teniente General Kuc había reclutado y adiestrado a más de 10.000 soldados en Yithkuel (Warrap),

³⁶ Entrevistas con oficiales de alto rango del Servicio Nacional de Seguridad y fuentes confidenciales, en lugares no revelados y por teléfono, agosto de 2019 a febrero de 2020.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Entrevistas con operativos del servicio de inteligencia militar de las FDPSS, oficiales de alto rango del sector de seguridad, la sociedad civil y fuentes confidenciales, en lugares no revelados, diciembre de 2019 a febrero de 2020.

⁴⁰ “Giada” en árabe significa “cuartel”. Entrevistas con operativos del servicio de inteligencia militar de las FDPSS, oficiales de alto rango del sector de seguridad, la sociedad civil y fuentes confidenciales, en lugares no revelados, diciembre de 2019 a febrero de 2020.

⁴¹ Entrevistas con operativos del servicio de inteligencia militar de las FDPSS, oficiales de alto rango del sector de seguridad, la sociedad civil y fuentes confidenciales, en lugares no revelados, diciembre de 2019 a febrero de 2020.

como describió el Grupo de Expertos en su informe provisional de 2019 (S/2019/897) (véase también el anexo 3 del presente informe)⁴².

37. El Grupo de Expertos corroboró que el General de División Tueny había desviado municiones y armas, incluida artillería pesada, del inventario del servicio militar de inteligencia de las FDPSS a una milicia bajo su control en Lagos (zonas de Wunthou, Adior y Pagarau). Después de la firma del acuerdo de paz revitalizado en septiembre de 2018, el General de División Tueny reclutó la milicia, en violación del artículo 2.1.8 del acuerdo, y le suministró armas y uniformes⁴³. De conformidad con la información obtenida por el Grupo de Expertos, el General de División Tueny armó a la milicia en preparación de una posible ofensiva contra zonas habitadas por comunidades de etnia nuer, consideradas partidarias del M/ELPS-O⁴⁴.

E. Violación del embargo de armas por el Servicio Nacional de Seguridad

38. De conformidad con los párrafos 4 a 6 de la resolución 2428 (2018), prorrogados por la resolución 2471 (2019), que establecen la supervisión de la aplicación del embargo de armas establecido en todo el territorio de Sudán del Sur, el Grupo de Expertos ha tratado de obtener, examinar y analizar información relativa al suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo en Sudán del Sur, así como la capacitación y asistencia de carácter militar incluidas en el embargo.

39. El Grupo de Expertos determinó que, en el período comprendido entre marzo y junio de 2019, el Director General de la Oficina de Seguridad Interna, Teniente General Kuc, había violado el embargo de armas al obtener tres entregas de armas, en su mayoría AK-47, y las municiones correspondientes del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad del Sudán, ahora conocido como Servicio de Inteligencia General⁴⁵.

40. El Grupo de Expertos corroboró además que Green Flag Aviation Co. Ltd.⁴⁶, una empresa sudanesa de servicios de transporte aéreo con sede en Jartum, había entregado las armas y municiones en Yuba y Wau (Bahr el-Ghazal Occidental), en un Antonov AN-74 cuya matrícula o número de cola era ST-BDT⁴⁷. De acuerdo con la información obtenida por el Grupo de Expertos, el Servicio de Inteligencia General controlaba Green Flag Aviation⁴⁸. Además, según información corroborada, el Grupo de Expertos determinó que el Teniente Coronel, Jackson Garang Ajou, de la Oficina de Seguridad Interna, uno de los oficiales de confianza del Teniente General Kuc, había supervisado los envíos en Yuba⁴⁹.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Entrevistas con personal del sector de la seguridad y fuentes confidenciales, en lugares no revelados, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

⁴⁵ Entrevistas con oficiales del Servicio Nacional de Seguridad, altos funcionarios gubernamentales y fuentes confidenciales, en lugares no revelados y por teléfono, marzo de 2019 a febrero de 2020.

⁴⁶ La compañía también es conocida como Green Flag Airline. Véase la página de Green Flag Aviation en Facebook, que puede consultarse en www.facebook.com/pages/category/Tour-Agency/Green-Flag-Aviation-201776569880100/.

⁴⁷ Pruebas fotográficas que obran en poder del Grupo de Expertos. Entrevistas con oficiales de alto rango del Servicio Nacional de Seguridad y fuentes confidenciales, en lugares no revelados, agosto a diciembre de 2019.

⁴⁸ Entrevistas con fuentes confidenciales, en lugares no revelados, octubre a diciembre de 2019.

⁴⁹ Pruebas fotográficas que obran en poder del Grupo de Expertos. Entrevistas con fuentes confidenciales, en lugares no revelados, mayo a septiembre de 2019.

41. Además de estos envíos, el Grupo de Expertos corroboró que, siguiendo las instrucciones del Teniente General Kuc, el Teniente Coronel Angelo Kuot Garang Kuot, de la Oficina de Seguridad Interna, y el Teniente Coronel Ajou habían tratado activamente de adquirir armas y municiones. El Grupo de Expertos verificó también que el Teniente Coronel Ajou y el Teniente Coronel Kuot habían viajado al extranjero con ese fin durante el período que abarca el informe⁵⁰.

F. Violaciones del acuerdo de cese de las hostilidades y del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos

42. Desde la firma del acuerdo de paz revitalizado, los grupos armados se han adherido a grandes rasgos al acuerdo de cese de las hostilidades firmado en diciembre de 2017, reiterado en la disposición de un alto el fuego permanente establecido en virtud del artículo 2.1 del acuerdo de paz, lo que ha mejorado las condiciones de seguridad en muchas zonas del país y aliviado los problemas de acceso humanitario.

43. La situación humanitaria en Sudán del Sur ha seguido siendo precaria, pese a la firma del acuerdo de paz revitalizado en septiembre de 2018. Más de 7 millones de personas en Sudán del Sur dependen de la asistencia humanitaria, casi 2,3 millones de sursudaneses viven como refugiados o solicitantes de asilo y en torno a 1,6 millones de personas siguen siendo desplazados internos⁵¹. La mayoría de los sursudaneses se enfrentan a una grave escasez de alimentos y tienen un acceso limitado o nulo a los servicios básicos, como el agua potable, la asistencia médica o la educación. Si bien algunos refugiados de Sudán del Sur han regresado a su país, muchos de estos retornos han sido solo temporales. La mayoría de los desplazados internos y refugiados con los que habló el Grupo de Expertos aún sentían que no podían regresar a sus hogares⁵².

44. Hasta enero de 2020, diversos grupos armados, incluidas las fuerzas de seguridad gubernamentales, violaron el acuerdo de cese de las hostilidades, perpetrando actos en contravención del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, en zonas de Ecuatoria Central y Occidental y el condado de Maiwut en el Alto Nilo. Estas violaciones de la seguridad, que han disminuido desde enero de 2020 tras la formación del nuevo Gobierno y las conversaciones entre el Gobierno y los grupos que no firmaron el acuerdo de paz revitalizado, demuestran la fragilidad del alto el fuego y sus repercusiones en los civiles vulnerables⁵³.

G. Desplazamiento forzoso, violencia sexual y de género y ataques contra civiles en Ecuatoria Central

45. En Ecuatoria Central, el grupo armado FSN, dirigido por el General Thomas Cirillo Swaka, ha mantenido una importante presencia de seguridad y un amplio

⁵⁰ Entrevistas con oficiales del Servicio Nacional de Seguridad y fuentes confidenciales, en lugares no revelados y por teléfono, marzo de 2019 a febrero de 2020.

⁵¹ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “South Sudan humanitarian snapshot”, enero de 2020.

⁵² Entrevistas con desplazados internos, residentes en emplazamientos de protección de civiles, refugiados, la sociedad civil y líderes comunitarios, en Bentiu, Yuba, Yei, Kampala, Addis Abeba y Nairobi, agosto de 2019 a febrero de 2020.

⁵³ Entrevistas con comandantes de las FDPSS, el M/ELPS-O, el FSN y el Consejo Político y Militar Provisional, la sociedad civil y líderes comunitarios y religiosos, en Yuba, Yei, Kampala, Nairobi y Jartum y por teléfono, agosto de 2019 a febrero de 2020.

apoyo local⁵⁴. El FSN no es signatario del acuerdo de paz revitalizado, ya que sostiene que no se han afrontado las causas fundamentales del conflicto de Sudán del Sur. Desde julio de 2019, el FSN forma parte del grupo no signatario Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur, que también está integrado por el F/EUSS, dirigido por el General Paul Malong Awan Anei (SSi.008), el Auténtico Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán, dirigido por Pagan Amum, y otros grupos políticos menores⁵⁵.

46. Dada la negativa sostenida del FSN a convertirse en parte en el acuerdo de paz revitalizado, las FDPSS han lanzado una ofensiva concertada contra las posiciones del FSN en Ecuatoria Central y Occidental desde enero de 2019. El FSN, que dispone de armamento y municiones limitadas, ha ido creando durante más de dos años una base de apoyo étnico y político entre la población local⁵⁶. El FSN ha evitado el conflicto directo con las FDPSS, que están mejor equipadas, ha recurrido al uso de pequeñas unidades móviles fuera de las carreteras principales y los centros urbanos, y ha utilizado tácticas asimétricas de emboscadas e incursiones contra las bases de las FDPSS⁵⁷. En Ecuatoria Central, estas unidades móviles han permanecido a grandes rasgos bajo el mando del Teniente General Kenyi Leburon⁵⁸.

47. El 13 de diciembre de 2019, el FSN tomó los cuarteles de las FDPSS de Lasu (Ecuatoria Central). Tras el ataque, las FDPSS retomaron la base y cometieron graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Lasu y sus alrededores. Las hostilidades emprendidas en represalia afectaron significativamente a los civiles⁵⁹.

48. Cuando los soldados de las FDPSS volvieron a capturar la ciudad de Lasu a partir del 16 de diciembre de 2019, dichos soldados tomaron represalias contra la población atacando a civiles, cometiendo actos de violencia sexual y de género y saqueando e incendiando propiedades, incluidas iglesias⁶⁰. Durante la ofensiva, los soldados ocuparon la escuela primaria de Lasu y, a fecha del 20 de febrero de 2020, la escuela continuaba ocupada, en violación de los artículos 2.1.10.7 y 2.2.3.1 del acuerdo de paz revitalizado, que exige que todos los grupos armados desalojen las estructuras civiles⁶¹.

49. Además, el Grupo de Expertos corroboró que las FDPSS habían agredido sexualmente y violado a mujeres, entre ellas al menos una mujer embarazada, después de la toma de Lasu. Las FDPSS también habían ordenado que la población se concentrara en la ciudad de Lasu. Tras esta orden, las FDPSS atacaron, detuvieron y ejecutaron a jóvenes, incluidos niños, que los soldados habían encontrado fuera de las zonas controladas, alegando que los jóvenes eran combatientes del FSN⁶². El Grupo

⁵⁴ Entrevistas con la sociedad civil, líderes comunitarios y religiosos, y civiles, en Yuba, Yei, Kampala y Nairobi y por teléfono, agosto de 2019 a febrero de 2020.

⁵⁵ Entrevistas con la dirección de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur, en Nairobi, Roma, Addis Abeba y Kampala y por teléfono, agosto y septiembre de 2019.

⁵⁶ Entrevistas con la sociedad civil, líderes comunitarios y religiosos, y civiles, en Yuba, Yei, Kampala y Nairobi y por teléfono, agosto de 2019 a febrero de 2020.

⁵⁷ Entrevistas con el General Thomas Cirillo, el alto mando y comandantes sobre el terreno del FSN, líderes comunitarios y fuentes confidenciales, en Roma, Kampala, Nairobi y por teléfono, febrero de 2020.

⁵⁸ Entrevistas con comandantes del FSN y fuentes confidenciales, en Yei, Nairobi y Kampala y por teléfono, agosto de 2019 a febrero de 2020.

⁵⁹ Entrevistas con la sociedad civil y fuentes confidenciales, en Yuba y Kampala, enero y febrero de 2020.

⁶⁰ El Grupo de Expertos corroboró que esas violaciones se habían producido en Kikuyu Boma, Lasu y la zona de Lasu. Entrevistas con la sociedad civil y fuentes confidenciales, en Yuba y Kampala, enero y febrero de 2020.

⁶¹ Informes confidenciales que obran en poder del Grupo de Expertos y entrevistas con fuentes confidenciales, en Yuba y Kampala, enero y febrero de 2020.

⁶² Entrevistas con fuentes confidenciales, en Yei, febrero de 2020.

de Expertos verificó además que, en violación del artículo 2.1.10.7.9 del acuerdo de paz revitalizado, los soldados de las FDPSS habían actuado contra los trabajadores humanitarios, obligándolos a trasladarse a los cuarteles de las FDPSS para atender a los soldados heridos y forzándolos a transportar a los soldados en vehículos humanitarios hasta la base de las FDPSS⁶³.

50. De acuerdo con la información obtenida por el Grupo de Expertos, el General Malong Agot estuvo al mando de las FDPSS en la zona de Yei hasta enero de 2020, en dependencia jerárquica de dos personas sancionadas, el entonces Comandante de la Fuerza Terrestre, Teniente General Santino Deng Wol (SSi.004), y el Jefe de Estado Mayor, Primer Teniente General Gabriel Jok Riak (SSi.001)⁶⁴. Durante la ofensiva para retomar Lasu, el Teniente General Jok Riak viajó en helicóptero a Yei los días 16 y 17 de diciembre de 2019 para comandar directamente las operaciones de las FDPSS⁶⁵. El servicio de inteligencia militar de las FDPSS, el Servicio Nacional de Seguridad y las fuerzas bajo el control de la antigua administración de Río Yei también han participado activamente en las operaciones⁶⁶.

51. Han continuado los ataques contra civiles en Ecuatoria Central debido a su supuesta afiliación étnica y política. El Grupo de Expertos ha corroborado que se habían producido varias ejecuciones extrajudiciales en el condado de Morobo, con el fin de intimidar a los civiles acusados de apoyar al FSN⁶⁷.

52. El Grupo de Expertos ha corroborado las pruebas que demuestran que, entre diciembre de 2019 y enero de 2020, las FDPSS habían ejecutado arbitrariamente a tres civiles a la luz del día en sus propias tierras mientras recogían sus productos o en el campo al regresar a casa⁶⁸. Las familias de las víctimas explicaron al Grupo de Expertos que los soldados de las FDPSS estaban vigilando de cerca a todo el mundo y la madre de una de las víctimas señaló que habían matado a su hijo solo para mostrar a la población lo que sucedería a quien apoyara al FSN⁶⁹. Algunas de las familias decidieron huir a Uganda, porque temían que las FDPSS volvieran para acabar con sus vidas.

53. Desde el 15 de enero de 2020, las FDPSS y el FSN han observado un tenue alto el fuego, tras las conversaciones entre una delegación gubernamental de alto nivel y los dirigentes de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur. La Comunidad de Sant'Egidio, una organización católica laica, guio los debates en Roma. A fecha del 6 de marzo de 2020, el alto el fuego se mantenía. Sin embargo, a medida que continuaron las conversaciones, el Grupo de Expertos corroboró que tanto las FDPSS como el FSN habían reforzado sus posiciones militares en preparación para más combates. Además, el Grupo de Expertos ha recibido testimonios originales y coherentes de víctimas y testigos, en los que se describían las persistentes violaciones de los derechos humanos de los civiles cometidas por las FDPSS desde enero de 2020⁷⁰.

⁶³ Informe confidencial que obra en poder del Grupo de Expertos y entrevistas con fuentes confidenciales, en Yuba y Kampala, enero de 2020.

⁶⁴ El General Malong Agot fue reemplazado en enero de 2020 por el General Lual Deng. Entrevistas con oficiales de alto rango de las FDPSS, funcionarios del gobierno y fuentes confidenciales, en Yei, Yuba, Nairobi y Kampala y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

⁶⁵ Entrevistas con comandantes y combatientes de las FDPSS y el FSN, la sociedad civil, líderes comunitarios y religiosos, y civiles, en Yuba, Yei, Kampala y Nairobi y por teléfono, diciembre de 2019 a febrero de 2020.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Entrevistas con fuentes confidenciales, en lugares no revelados, enero y febrero de 2020.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Entrevistas con fuentes confidenciales, en lugares no revelados, febrero de 2020.

⁷⁰ Entrevistas con comandantes y combatientes de las FDPSS y el FSN, la sociedad civil, líderes comunitarios y religiosos, y civiles, en Yuba, Yei, Kampala y Nairobi y por teléfono, febrero de 2020.

H. Violaciones graves de los derechos humanos, incluida la violencia sexual y de género, en Maiwut

54. Como se describe en el informe provisional del Grupo de Expertos de 2019 (S/2019/897, anexo II), desde agosto de 2019 el Gobierno ha apoyado a una facción escindida del ELPS-O en el condado de Maiwut, en el Alto Nilo, dirigida por el General de División James Ochan Puot. El fin del apoyo gubernamental era aprovechar las divergencias políticas internas y las tensiones subétnicas para promover conflictos por intermediarios en el seno del M/ELPS-O y debilitar la unidad de la base de poder del Sr. Machar⁷¹.

55. Desde el comienzo de los combates, el Grupo de Expertos ha corroborado el alcance del apoyo financiero y militar del Gobierno al grupo del General de División Ochan. El jefe del servicio de inteligencia militar de las FDPSS, el General de División Tueny, y los Directores Generales de la Oficina de Seguridad Interna y de la Oficina de Inteligencia General, de acuerdo con el Presidente Kiir, el Vicepresidente Deng Gai y el Teniente General Jok Riak, proporcionaron apoyo económico y asistencia militar al General de División Ochan para que atacara posiciones del ELPS-O, en violación del acuerdo de cese de las hostilidades (véase el anexo 4)⁷².

56. En preparación para la ofensiva, el General de División Ochan reclutó, en ocasiones por la fuerza, y adiestró a una milicia de civiles, en su mayoría de su circunscripción nuer gajaak cie-waw. De esta fuerza, comandada por el General de Brigada Chuol Yoa Gok, formaban parte niños soldados. Entre los ataques militares de Ochan, desde agosto de 2019 hasta principios de enero de 2020, cabe mencionar asaltos al acantonamiento del ELPS-O de Turu y a su cuartel general de Jikou. Estos asaltos provocaron abusos generalizados de los derechos humanos⁷³.

57. Desde enero de 2020, se ha informado de luchas limitadas. El Gobierno ordenó al General de División Ochan y al comandante de la División 5 de Infantería del ELPS-O a cargo de la zona, General de División James Khor Chol, que se trasladaran a Yuba para entablar conversaciones⁷⁴. El 11 de febrero de 2020, los dos Generales firmaron un acuerdo en el que se pedía un alto el fuego permanente y el compromiso de aplicar el acuerdo de paz revitalizado.

58. Sin embargo, mientras se celebraban negociaciones en Yuba en febrero de 2020, el Grupo de Expertos recibió pruebas de que se habían producido represalias contra la población civil acusada de apoyar al M/ELPS-O, cometidas por la milicia del General de División Ochan. Entre las violaciones de los derechos humanos se contaban casos de violencia sexual y de género —incluidas mutilaciones de los genitales tanto de hombres como de mujeres y violaciones— y asesinatos, en violación de los artículos 2.1.10.2 y 2.1.10.5 del acuerdo de paz revitalizado. El Grupo de Expertos escuchó múltiples testimonios originales y coherentes de que el

⁷¹ Entrevistas con funcionarios públicos, personal del servicio de inteligencia militar de las FDPSS, líderes comunitarios nuer cie-waw y fuentes confidenciales, en Yuba y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Entrevistas con líderes comunitarios y ancianos cie-waw nuer, la sociedad civil y fuentes confidenciales, en Yuba, Nairobi y Kampala y por teléfono, octubre de 2019 a febrero de 2020.

⁷⁴ Entrevistas con representantes gubernamentales, líderes políticos y comandantes de alto rango del M/ELPS-O, ancianos y líderes comunitarios cie-waw nuer, la sociedad civil y fuentes confidenciales, en Yuba, Nairobi y Kampala y por teléfono, enero y febrero de 2020.

General de División Ochan y el General de Brigada Chuol Yoa Gok habían dirigido la violencia⁷⁵.

I. Riesgos para la seguridad relacionados con la militarización de zonas civiles y la proliferación de armas

59. Las FDPSS y el ELPS-O no han desmilitarizado las zonas civiles, a pesar de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1 del acuerdo de paz revitalizado, y han seguido ocupando propiedades civiles, como escuelas y hospitales. Por ejemplo, en Unidad, el Grupo de Expertos corroboró que el establecimiento de acantonamientos y centros de adiestramiento había provocado una mayor militarización de las zonas habitadas por civiles. El 7 de enero de 2020, los soldados de las FDPSS y el ELPS-O ocuparon una escuela en Kalyak para alojar en ella a una fuerza de policía unificada⁷⁶.

60. Desde el establecimiento del acantonamiento del ELPS-O en Dingding, la población del pueblo casi se ha triplicado. El aumento se debe a la aglomeración de soldados, que ha puesto en peligro a los civiles. Dingding está muy cerca de Bentiu, una ciudad que, como ha documentado el Grupo de Expertos, ha sido un foco de conflictos entre las FDPSS y el ELPS-O (véanse [S/2015/656](#), [S/2016/70](#) y [S/2017/326](#)). El Grupo de Expertos reunió pruebas de que la militarización de Dingding desde el acantonamiento de los soldados del ELPS-O había dado lugar a mayores niveles de violencia y acoso sexual contra las mujeres y las niñas⁷⁷. Según los testimonios, estos incidentes habían ocurrido cuando las mujeres estaban recogiendo leña y agua en lugares cercanos a Dingding⁷⁸.

61. El Grupo de Expertos observa que Sudán del Sur ha seguido siendo un país altamente militarizado, a pesar del acuerdo de paz revitalizado y la formación del Gobierno de Transición. El Grupo de Expertos entrevistó a agentes de la policía local en Bentiu, Malakal, Rumbek y Torit, quienes señalaron sistemáticamente que los civiles tenían acceso a una vasta proliferación de armas que no estaban reglamentadas, lo que entrañaba riesgos para los agentes de las fuerzas del orden y tenía repercusiones en la paz y la estabilidad de Sudán del Sur. Múltiples civiles confirmaron al Grupo de Expertos que, debido a los altos niveles de inseguridad y a la falta de confianza en las FDPSS, habían adquirido armas, incluidos rifles de asalto, para su protección⁷⁹.

62. Los servicios de seguridad de Sudán del Sur están equipados con una amplia variedad de armas. Si bien el Grupo de Expertos observó que los miembros de las FDPSS que no eran de élite tenían armas antiguas, en general esas armas parecían estar en buenas condiciones de funcionamiento, pero disponían de un mínimo de equipo personal y poca munición y no tenían correajes⁸⁰. La Guardia Presidencial de élite (conocida como la División Tigre), los comandos y el Servicio Nacional de

⁷⁵ Entrevistas con líderes comunitarios cie-waw nuer, la sociedad civil, personal de organizaciones no gubernamentales y fuentes confidenciales, en Yuba, Nairobi y Kampala y por teléfono, enero y febrero de 2020.

⁷⁶ Documento confidencial en poder del Grupo de Expertos y entrevistas con la población local y fuentes confidenciales, en Bentiu y en un lugar no revelado, febrero de 2020.

⁷⁷ Entrevistas con la población local y fuentes confidenciales, en Yuba, Dingding, Rubkona y un lugar no revelado, febrero de 2020.

⁷⁸ Entrevistas con la sociedad civil, en Bentiu, Torit, Rumbek, Malakal y Yuba y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Observaciones del Grupo de Expertos y entrevistas con personal militar de alto rango de la UNMISS, la sociedad civil y personal de organizaciones no gubernamentales, en Bentiu, Torit, Rumbek, Malakal y Yuba y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

Seguridad estaban equipados con armas de mejor calidad⁸¹. Estas fuerzas también estaban equipadas con vehículos blindados de transporte de personal en buenas condiciones de funcionamiento⁸². Sin embargo, el Grupo de Expertos observa que los miembros de las FDPSS que no son de élite han mantenido vehículos blindados de transporte de personal más antiguos y en peores condiciones. En ciudades como Bentiu, Bor, Malakal, Torit, Wau, Yambio y Yei, los antiguos vehículos blindados de transporte de personal, organizados en “pelotones”⁸³, apoyan a la infantería de las FDPSS⁸⁴.

63. Las FDPSS han conservado otras armas pesadas blindadas y mecanizadas que, según la evaluación realizada por el Grupo de Expertos, están en buenas condiciones de funcionamiento. Este equipo, sin embargo, se ha mantenido en los cuarteles en violación del artículo 2.2.3.2 del acuerdo de paz revitalizado, que exige la recogida de armas pesadas⁸⁵. El Grupo de Expertos también observó tres helicópteros de ataque Mi-24V en el Aeropuerto Internacional de Yuba en febrero de 2020⁸⁶. Las imágenes de satélite confirmaron que siete de los ocho Mi-24 dañados descritos en informes anteriores (véase [S/2019/301](#)) y almacenados en el cuartel general de las FDPSS, conocido como “Bilpham”, en las afueras de Yuba, habían permanecido estáticos y parecían no estar en funcionamiento (véase el anexo 5).

III. Finanzas y recursos naturales: riesgos de explotación ilícita y malversación de recursos públicos

64. Los vastos recursos naturales del país, en su mayor parte no regulados, han sido objeto de una explotación y un comercio ilícitos generalizados, que el Grupo de Expertos ha localizado en todo el país, de conformidad con el párrafo 14 j) de la resolución [2428 \(2018\)](#), reafirmado en la resolución [2471 \(2019\)](#). En particular, el Grupo de Expertos observa que la fragmentación del control y la gestión de los recursos naturales del país, especialmente el petróleo crudo, el oro y la madera, y de las finanzas públicas ha aumentado el riesgo de malversación y desvío del patrimonio público. El Consejo de Seguridad expresó su preocupación por las irregularidades financieras que ponían en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de Sudán del Sur en el párrafo 15 de la resolución [2428 \(2018\)](#), reafirmado en la resolución [2471 \(2019\)](#).

65. El Grupo de Expertos ha determinado sistemáticamente las formas en que la competencia por los recursos naturales y públicos ha amenazado la paz y la seguridad (véanse [S/2015/656](#), [S/2016/70](#), [S/2018/292](#), [S/2018/1049](#) y [S/2019/897](#)). Los signatarios del acuerdo de paz revitalizado reconocieron que existían riesgos

⁸¹ Las fuerzas de élite parecían estar extremadamente bien equipadas, con las últimas armas adquiridas en 2013 y 2014 (principalmente fusiles de asalto israelíes Galil ACE de 7,62 x 39 mm), nuevos uniformes y correaes de alta calidad. Observaciones del Grupo de Expertos y entrevistas con personal militar de la UNMISS, la policía de las Naciones Unidas, organismos de las Naciones Unidas y la sociedad civil, en Yuba y Yei, y por teléfono, agosto de 2019 a febrero de 2020.

⁸² Observaciones del Grupo de Expertos y entrevistas con personal militar de la UNMISS, la policía de las Naciones Unidas y organismos de las Naciones Unidas, en Yuba, Bentiu, Malakal, Torit y Rumbek y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

⁸³ En la nomenclatura militar relativa a vehículos blindados, un “pelotón” representa tres o cuatro vehículos blindados de transporte de personal. Tres pelotones forman un “escuadrón” y tres escuadrones forman un “regimiento”.

⁸⁴ Observaciones del Grupo de Expertos y entrevistas con personal militar de la UNMISS, la policía de las Naciones Unidas y organismos de las Naciones Unidas, en Yuba, Bentiu, Malakal, Torit y Rumbek y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

⁸⁵ Entrevistas con el Mecanismo de Vigilancia y Verificación del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad, en Yuba, Bentiu, Malakal, Torit, Rumbek y Bor y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

⁸⁶ Observaciones del Grupo de Expertos, en Yuba, febrero de 2020.

similares asociados a la gestión de los fondos públicos y los recursos naturales y se comprometieron a cumplir estrictamente las leyes vigentes en el país que regulaban los sectores del petróleo y la minería y a aplicar una serie de reformas de la gobernanza económica consagradas en el Acuerdo⁸⁷.

66. Por ejemplo, en el artículo 1.4.2 del acuerdo de paz revitalizado se dispuso que, durante el período previo a la transición, que concluyó el 21 de febrero de 2020, las partes del Acuerdo se comprometían a utilizar los recursos nacionales con prudencia y de manera transparente, en aras del interés superior del pueblo de Sudán del Sur. En el curso de sus investigaciones, sin embargo, el Grupo de Expertos llegó a la conclusión de que el órgano que supervisaba el período previo a la transición, el Comité Nacional Previo a la Transición, no había gestionado de forma transparente los fondos asignados a la aplicación de la paz, incluidos los fondos necesarios para medidas de seguridad urgentes, como se detalla a continuación.

67. La venta de petróleo crudo del país ha seguido siendo la principal fuente de ingresos públicos del Gobierno. El Grupo de Expertos observa, sin embargo, que no se han cumplido las medidas exigidas en el acuerdo de paz revitalizado, la Ley del petróleo y la Ley de gestión de los ingresos derivados del petróleo para garantizar la transparencia de los ingresos generados por la venta de petróleo. Sin supervisión, el petróleo crudo del país, que probablemente generará cerca de 1.000 millones de dólares de ingresos en 2020, se ha expuesto a la malversación y el desvío de fondos públicos⁸⁸.

68. El Grupo de Expertos también ha documentado la forma en que las lagunas en la supervisión y la gestión del oro y las maderas duras en particular han permitido la extracción y explotación ilícitas de los recursos naturales del país. En Ecuatoria Oriental, se utilizan ilegalmente máquinas industriales en explotaciones mineras de oro sin licencia en las cercanías de la ciudad de Kapoeta. La administración local de Kapoeta también ha emitido licencias de extracción al margen del canal de registro legal a través del Ministerio de Minería. En otras partes de Ecuatoria Oriental, la División 7 de las FDPSS ha proporcionado protección a los madereros que talaban y transportaban madera de construcción ilegalmente.

A. Riesgos de malversación de los recursos públicos asignados al Comité Nacional Previo a la Transición

69. En el artículo 1.4.8 del acuerdo de paz revitalizado se dispone que se creará un fondo, con cargo a los fondos públicos y las contribuciones de los donantes, para llevar a cabo las actividades realizadas durante el período previo a la transición. El Comité Nacional Previo a la Transición gestionará el fondo de manera transparente e informará al respecto al Presidente de Sudán del Sur y a las partes. En el curso de sus investigaciones, el Grupo de Expertos constató que el Comité no había administrado de manera transparente los fondos asignados a la aplicación de la paz.

⁸⁷ En virtud del artículo 4.1.7 del acuerdo, las partes se comprometieron a emprender reformas inmediatas de la gestión económica y financiera; en virtud del artículo 4.8.1.14.4 se comprometieron a velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de la versión revisada de la Ley del petróleo de 2012, y la Ley de minería de 2012; y en virtud del artículo 4.8.1.1 se comprometieron a aplicar las disposiciones de la Ley de gestión de los ingresos procedentes del petróleo de 2012, en un plazo de tres meses desde el Período de Transición.

⁸⁸ Sobre la base del precio medio de unos 55 dólares por barril de petróleo crudo Brent en febrero de 2020 y la venta de 49.000 barriles diarios de las mezclas Dar y Nilo del país, lo que equivale a unos 82 millones de dólares al mes o 984 millones de dólares al año. Véase Administración de Información Energética de los Estados Unidos, "South Sudan Open Data". Los datos están disponibles en eia.gov/pendata (consultados en febrero de 2020).

70. Como parte de los arreglos relativos al período previo a la transición, el Banco de Sudán del Sur, que es el banco central del país, abrió dos cuentas para que el Comité Nacional Previo a la Transición recibiera transferencias y retirase fondos: una cuenta en moneda local (núm. 00269191294239) en libras sursudanesas y una cuenta en divisa fuerte (núm. 00269211295177) en dólares de los Estados Unidos. De conformidad con los procedimientos para la gestión de las cuentas, el Secretario del Comité, Martin Elia Lomuro, o su “representante” debían firmar certificados especiales para todos los pagos que confirmaran el monto y la fecha de los pagos. Sin embargo, en los documentos examinados por el Grupo de Expertos, no estaba claro quién era el “representante”, lo que daba lugar a la posibilidad de que cualquier funcionario del Comité tuviera autoridad para firmar certificados de pagos⁸⁹.

71. Mediante información de múltiples fuentes, el Grupo de Expertos verificó que uno de los Copresidentes del Comité Nacional Previo a la Transición, el más alto representante del M/ELPS-O en el organismo, Henry Odwar, no había recibido ningún documento en relación con la aprobación de la entrega de fondos del Comité o pagos realizados desde las cuentas del Comité, en violación de lo dispuesto en el acuerdo de paz revitalizado (art. 1.4.8)⁹⁰.

72. Sobre la base de los datos obtenidos en el curso de sus investigaciones, el Grupo de Expertos ha podido informar sobre los cuatro tramos de financiación proporcionados por el Gobierno al Comité Nacional Previo a la Transición y también a los mecanismos previos a la transición. En primer lugar, desde octubre de 2018 hasta mayo de 2019, durante los primeros ocho meses del período previo a la transición, el Comité recibió 10 millones de dólares⁹¹. De esta asignación, 2 millones de dólares se destinaron a los mecanismos de seguridad del Comité⁹².

73. Desde mayo hasta noviembre de 2019, se puso a disposición del Comité un segundo tramo de 10 millones de dólares⁹³. Del monto total, 6,8 millones de dólares se dedicaron al pago de las actividades de los mecanismos de seguridad en el período previo a la transición y 3,2 millones de dólares se utilizaron para contratar vehículos y habitaciones de hotel para las operaciones del Comité⁹⁴.

74. En noviembre de 2019, el Banco de Sudán del Sur transfirió al Comité Nacional Previo a la Transición una tercera habilitación de créditos de 40 millones de dólares⁹⁵, de los cuales 16,5 millones de dólares se asignaron a los mecanismos de seguridad del período previo a la transición⁹⁶. En particular, el Comité asignó 5 millones de dólares al Comité Mixto encargado de los Arreglos Transitorios de Seguridad, 4 millones de dólares a la Comisión Militar Conjunta para el Alto el Fuego, 3,5 millones de dólares a la Junta Mixta de Defensa, 1,1 millones de dólares a la Junta de Examen

⁸⁹ Carta de fecha 20 de noviembre de 2019 del Banco de Sudán del Sur sobre los pagos del Comité Nacional Previo a la Transición a los clientes con arreglo a los procedimientos y los procesos de adopción de decisiones; en poder del Grupo de Expertos.

⁹⁰ Entrevistas con representantes del M/ELPS-O y el MLPS-AD, personal de organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, en Yuba y Nairobi y por teléfono, enero y febrero de 2020.

⁹¹ Véase Daniel Danis y Charles Wote, “Gov’t avails only \$10 million for pre-transitional period – NPTC”, Eye Radio, 30 de julio de 2019.

⁹² Entrevistas con miembros del Comité, representantes del M/ELPS-O y el MLPS-AD y personal de organizaciones no gubernamentales, en Yuba, Roma y Nairobi, enero y febrero de 2020.

⁹³ Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación reconstituida, “Minutes of the eighth meeting of the Reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission (RJMEC) held on 1st August 2019 at Palm Africa Hotel, Juba, South Sudan”.

⁹⁴ Entrevistas con miembros del Comité, representantes del M/ELPS-O y personal de organizaciones no gubernamentales, en Yuba, Roma y Nairobi y por teléfono, enero y febrero de 2020.

⁹⁵ South Sudan News Now, “Kiir’s gov’t disburses \$40 million to NPTC for urgent implementation of peace deal”, 20 de noviembre de 2019.

⁹⁶ Sudan Tribune, “South Sudanese troops remain deployed outside cantonment sites–CTSAMVM”, 16 de diciembre de 2019.

Estratégico de la Defensa y la Seguridad y 2 millones de dólares a la Comisión de Desarme, Desmovilización y Reintegración (véase el anexo 6). El Grupo de Expertos no ha examinado ninguna documentación sobre los restantes 23,5 millones de dólares.

75. En opinión del Grupo de Expertos, la transferencia de 3,5 millones de dólares a la Junta Mixta de Defensa en la tercera asignación entrañaba riesgos de malversación o desvío de fondos públicos, ya que la Junta Mixta de Defensa no tenía un mandato que requiriese una considerable inversión de fondos para llevar a cabo sus tareas previas a la transición. En su calidad de órgano técnico, la Junta Mixta de Defensa solo tiene el mandato de supervisar la aplicación de los aspectos militares del acuerdo de paz revitalizado. Varias fuentes informaron al Grupo de Expertos de que la Junta Mixta de Defensa había recibido una transferencia de fondos incluso antes de que el Comité Nacional Previo a la Transición examinara con ella un presupuesto para su labor⁹⁷.

76. El 6 de febrero de 2020, dos semanas antes del inicio de las funciones del Gobierno de Transición, el Gobierno anunció la autorización de una cuarta habilitación de créditos de 40 millones de dólares para el Comité Nacional Previo a la Transición⁹⁸.

77. El Grupo de Expertos comprobó también que se habían pagado dietas de alojamiento a los delegados del Comité Nacional Previo a la Transición desde diciembre de 2018. Sin embargo, la dirección del Comité nunca tomó colectivamente una decisión sobre la asignación y gestión de recursos para el alojamiento de sus delegados. El costo de contratar habitaciones de hotel para los delegados del Comité en los hoteles Pyramid Continental, Panorama Plaza y Palm Africa de Yuba estaba entre los 2.500 dólares y los 3.000 dólares mensuales⁹⁹. En el mismo contexto, el Grupo de Expertos examinó una carta de la administración del hotel Palm Africa, de fecha 30 de agosto de 2019, en la que se notificaba a los delegados del Comité la terminación de los servicios de hotel debido al impago de las facturas correspondientes a seis meses, lo que indicaba que el dinero transferido para pagar el alojamiento podría no haber llegado a su destino¹⁰⁰.

78. El Grupo de Expertos observa que la falta de información transparente sobre la autorización de pago y utilización de todos los tramos de financiación proporcionados al Comité Nacional Previo a la Transición por el Banco de Sudán del Sur comporta un riesgo de posible uso indebido y malversación de fondos públicos. El Grupo de Expertos no ha podido verificar el destino de la mayoría de las asignaciones presupuestarias comprometidas del Comité. El Grupo de Expertos se puso en contacto con la Presidencia del Comité para aclarar la cuestión de la autorización de pago y el uso de los fondos del Comité¹⁰¹. Hasta la fecha, el Grupo de Expertos no ha recibido ninguna respuesta sustantiva, solo un reconocimiento de que recibiría una respuesta detallada a más tardar el 6 de marzo, que aún no se ha recibido.

⁹⁷ Entrevistas con representantes del M/ELPS-O y el MLPS-AD, la sociedad civil y personal de organizaciones no gubernamentales, en Yuba y Nairobi y por teléfono, enero y febrero de 2020.

⁹⁸ Sudan Tribune, "South Sudan disbursed \$40m for peace implementation: African union", 6 de febrero de 2020.

⁹⁹ Entrevistas con miembros del Comité, representantes del M/ELPS-O y el MLPS-AD y personal de organizaciones no gubernamentales, en Yuba, Roma y Nairobi y por teléfono, enero y febrero de 2020.

¹⁰⁰ Documento que obra en poder del Grupo de Expertos.

¹⁰¹ Documento que obra en poder del Grupo de Expertos.

B. Riesgos de malversación de fondos públicos procedentes de la venta de petróleo

79. En el segundo semestre de 2019, el Gobierno aprobó los protocolos para poner fin a su práctica de venta anticipada de asignaciones de petróleo crudo, mediante la cual recibía pagos anticipados por petróleo que se entregaría en el futuro. El Ministerio del Petróleo explicó al Grupo de Expertos que había cancelado todos los cargamentos de petróleo crudo vendidos anticipadamente y no entregados y que el Ministerio de Finanzas y Planificación planeaba liquidar la deuda pendiente¹⁰². El Grupo de Expertos no puede confirmar el monto de la deuda pendiente. Como el Grupo de Expertos ha indicado anteriormente (véase S/2019/897), la práctica de venta anticipada de petróleo no es transparente, reduce los ingresos del Gobierno y es vulnerable a la desviación de fondos públicos. El acuerdo de paz revitalizado requiere que se realice un examen de los préstamos garantizados por petróleo en un plazo de seis meses desde el inicio de las funciones del Gobierno de Transición¹⁰³.

80. El Ministerio del Petróleo volvió a poner en marcha el sistema de comercialización de licitaciones al contado, que, según lo dispuesto en el artículo 4.8.1.7 del acuerdo de paz revitalizado, debe ser abierto transparente y competitivo. Cada mes, el Ministerio del Petróleo invita a docenas de empresas petroleras a participar por correo electrónico en licitaciones de la asignación gubernamental de petróleo crudo¹⁰⁴. El equipo de comercialización, un grupo gubernamental de carácter transversal de unos 22 expertos, evalúa las ofertas y determina el precio de mercado y la fecha de la expedición¹⁰⁵. Una vez eliminados los arreglos de venta anticipada, el sistema de licitaciones ha permitido que se realicen ofertas públicas, según documentación de 2019 que el Grupo de Expertos ha examinado¹⁰⁶. El Grupo de Expertos ha confirmado que, desde la suspensión de la venta anticipada, el Gobierno había otorgado cargamentos de petróleo crudo gubernamental a al menos cuatro compañías comercializadoras de petróleo diferentes¹⁰⁷.

81. Si bien el sistema de licitación al contado ya está en funcionamiento, sigue habiendo lagunas en la transparencia y la competitividad del sistema, debido a que el Ministerio del Petróleo no ha dado publicidad a la selección de los compradores, los términos de negociación y las cifras sobre los cargamentos extraídos, conforme a lo estipulado en el acuerdo de paz revitalizado¹⁰⁸. Según múltiples contactos que participan en el proceso de licitación y adopción de decisiones, en la práctica solo una parte de los cargamentos otorgados se han decidido mediante el sistema de licitación

¹⁰² Entrevistas con representantes del Ministerio del Petróleo, fuentes confidenciales y un analista del sector, en Yuba y Nairobi, noviembre de 2019. Véase también Radio Tamazuj, “South Sudan suspends crude oil pre-sale contracts”, 30 de junio de 2019.

¹⁰³ En el artículo 4.8.1.3 del acuerdo se dispone que, en un plazo de seis meses desde la transición, todos los préstamos y los contratos garantizados por el petróleo se localizarán, comprobarán y registrarán en aras de la transparencia y la rendición de cuentas.

¹⁰⁴ Entrevistas con representantes del Ministerio del Petróleo, empresarios del sector petrolero y una fuente confidencial, en Yuba, Nairobi y Addis Abeba, septiembre a diciembre de 2019.

¹⁰⁵ Entrevistas con un exmiembro del equipo de comercialización, empresarios sursudaneses y un analista del sector, en Yuba y por teléfono, septiembre a noviembre de 2019. Véase también Ministerio del Petróleo de Sudán del Sur, “Marketing report, June 2015 – May 2016”, septiembre de 2019. Documento que obra en poder del Grupo de Expertos.

¹⁰⁶ Documentos confidenciales que obran en poder del Grupo de Expertos.

¹⁰⁷ Entrevistas con representantes del Ministerio del Petróleo, exfuncionarios del Ministerio del Petróleo, empresarios del sector del petróleo y diplomáticos extranjeros, en Yuba, Nairobi y Addis Abeba y por teléfono, noviembre de 2019 a enero de 2020.

¹⁰⁸ En el artículo 4.14.4 del acuerdo se dispone específicamente la publicación de los contratos garantizados por el petróleo.

pública¹⁰⁹. En lugar de ello, la Oficina del Presidente, en coordinación con el Servicio Nacional de Seguridad, y no con el equipo de comercialización, ha seleccionado qué empresa recibiría el contrato de extracción de petróleo en aproximadamente la mitad de los cargamentos comercializados desde junio de 2019¹¹⁰.

82. El Grupo de Expertos observa que, si no se publican oportunamente los datos, se corre el riesgo de que el petróleo del país sea objeto de explotación y tráfico ilícitos y de desviación de los fondos públicos generados por la venta. En 2020, el Gobierno venderá probablemente 2 a 3 cargamentos de petróleo crudo mensuales a las compañías intermediarias de petróleo de carácter internacional y obtendrá así unos 82 millones de dólares mensuales de ingresos.¹¹¹

83. Para compensar la desaceleración de la liquidez oficial debida a la suspensión de la venta anticipada de petróleo y para afrontar el déficit presupuestario previsto para el ejercicio 2019/20, el Gobierno llegó a un acuerdo de facilidades de crédito por un importe en torno a 400 millones de dólares con el Banco Africano de Exportación e Importación¹¹². Los fondos procedentes de esta facilidad de crédito han permitido pagar los sueldos adeudados, partes del presupuesto del Comité Nacional Previo a la Transición y proyectos de desarrollo e infraestructura, como actualizaciones del aeropuerto internacional de Yuba¹¹³. Este acuerdo es un préstamo respaldado por petróleo (una forma de arreglo de venta anticipada), que se financiará en los próximos cuatro años mediante la venta de cargamentos de petróleo crudo¹¹⁴.

C. Riesgo de desvío de fondos públicos procedentes de la producción de petróleo y sus ingresos

84. El antiguo Ministro del Petróleo, Daniel Awow Chuang, se comprometió a promover la transparencia en la gestión y la financiación del petróleo del país. En junio de 2019, declaró a la prensa de Sudán del Sur que, al vender el petróleo crudo del país, la venta se haría pública. En octubre de 2019, el Ministerio del Petróleo puso en marcha su nuevo sitio web y, en febrero de 2020, el Ministerio publicó un informe sobre el sector del petróleo del país en el ejercicio 2018/19¹¹⁵. Sin embargo, el Grupo de Expertos observa que en el sitio web no ofrece datos actualizados de conformidad con lo dispuesto en la legislación del país sobre transparencia, lo que impide examinar

¹⁰⁹ Entrevistas con empresarios del sector del petróleo, diplomáticos extranjeros, exfuncionarios del Ministerio del Petróleo, un analista de un centro de estudio y una fuente confidencial, en Yuba, Nairobi y Addis Abeba y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

¹¹⁰ Entrevistas con empresarios del sector del petróleo, exfuncionarios del Ministerio del Petróleo, un analista de políticas y una fuente confidencial, en Yuba, Nairobi y Addis Abeba y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

¹¹¹ Sobre la base del precio medio de unos 55 dólares por barril de petróleo crudo Brent en febrero de 2020 y de 49,000 barriles al día de las mezclas Dar y Nilo del país, que equivalen a unos 82 millones de dólares al mes. Véase Administración de Información Energética de los Estados Unidos, “South Sudan Open Data”. Datos disponibles en eia.gov/opendata (consultados en febrero de 2020).

¹¹² “Facility agreement for USD 400 million loan finance facility to the Government of the Republic of South Sudan by African Export-Import Bank (Afrexim Bank)”, 15 de octubre de 2019. Documento que obra en poder del Grupo de Expertos; y entrevistas con economistas y fuentes confidenciales, en Yuba y por teléfono, diciembre de 2019 a febrero de 2020.

¹¹³ Documento confidencial en poder del Grupo de Expertos y entrevistas con diplomáticos extranjeros y un experto en finanzas, por teléfono, febrero de 2020.

¹¹⁴ Entrevistas con analistas del sector y una fuente confidencial, en Washington D. C. y por teléfono, febrero de 2020.

¹¹⁵ Entrevista con un representante del Ministerio del Petróleo en Yuba, noviembre de 2019. Véase también Radio Tamazuj, “New oil minister vows transparency in oil deals”, 18 de junio de 2019.

adecuadamente los recursos públicos¹¹⁶. El Grupo de Expertos ha estimado las cifras relacionadas con el petróleo mediante un examen de datos no publicados y sobre la base de entrevistas con fuentes confidenciales, a pesar de que en la Ley de gestión de los ingresos derivados del petróleo se dispone que el Ministerio del Petróleo debe publicar registros sobre los ingresos procedentes del petróleo cuatro veces al año¹¹⁷.

85. La producción de petróleo del país osciló entre 170.000 y 180.000 barriles diarios en el cuarto trimestre de 2019¹¹⁸. Por ejemplo, una serie de rupturas de oleoductos en los campos petrolíferos de Unidad y la zona administrativa de Ruweng y graves inundaciones provocó el cierre temporal de docenas de pozos, lo que contribuyó a una caída de la producción a corto plazo¹¹⁹. Es probable que en 2020 aumente la producción, ya que el Ministerio del Petróleo estima que unos 25 pozos de los campos petrolíferos de Thar Jath, en el bloque 5A al sur de Bentiu, que habían dejado de funcionar como resultado del conflicto (véase [S/2015/656](#)), tenían la capacidad de producir unos 16.000 barriles diarios durante 2020¹²⁰.

86. El aumento de la producción ha mejorado el presupuesto discrecional del ejercicio 2019/20 y ha permitido obtener fondos adicionales para aplicar el acuerdo de paz revitalizado y financiar el presupuesto de 1.300 millones de dólares del país¹²¹. A pesar de la creciente producción, cercana a 180.000 barriles diarios, gran parte de la producción de petróleo se ha entregado como compensación en especie a compañías petroleras, para sufragar los gastos operacionales y la participación en los beneficios, y al Sudán, como pago de las tasas de procesamiento, transporte y tránsito¹²². Teniendo en cuenta estas obligaciones financieras existentes y las previsiones presupuestarias del Ministerio de Finanzas y Planificación, el Grupo de

¹¹⁶ En el capítulo XVII, artículo 79.1, de la Ley del petróleo se dispone que el Ministro pondrá a disposición del público, tanto en el sitio web del Ministerio como por cualquier otro medio apropiado para informar a las personas interesadas, todos los datos clave de producción, ingresos y gastos del sector del petróleo, y los acuerdos y licencias relativos al petróleo.

¹¹⁷ De conformidad con la Ley de gestión de los ingresos derivados del petróleo, artículo IX, capítulo 31.1, el Ministerio publicará las actas de los ingresos procedentes del petróleo no más de seis semanas después del final de cada trimestre.

¹¹⁸ Las cifras fluctúan diariamente, pero han estado en torno a 130.000 barriles diarios en los bloques 3 y 7 de la mezcla Dar y han llegado hasta 45.000 barriles diarios en los bloques 1, 2 y 4; sobre la base de entrevistas con representantes del Ministerio del Petróleo, analistas del sector petrolero y la sociedad civil, en Yuba y Nairobi y por teléfono, noviembre de 2019, y Administración de Información Energética de los Estados Unidos, “South Sudan Open Data”. Datos disponibles en eia.gov/opendata (consultados en febrero de 2020).

¹¹⁹ Entrevistas con analistas sursudaneses del sector del petróleo y fuentes confidenciales, por teléfono, enero de 2020.

¹²⁰ Entrevistas con un funcionario del Ministerio del Petróleo, un analista del sector y un exfuncionario del Ministerio del Petróleo, en Yuba y por teléfono, agosto de 2019 a febrero de 2020; y una presentación de Sudd Petroleum Operating Company en la Conferencia Africana de Petróleo y Energía celebrada en Yuba, octubre de 2019.

¹²¹ Salvatore Garang Mabiordit, “Budget speech FY 2019/2020”, Ministerio de Finanzas y Planificación, que puede consultarse en <http://www.mofep-grss.org/wp-content/uploads/2019/07/Budget-Speech-draft-FY-19-20-Final.pdf>; y Salvatore Garang Mabiordit, “FY 2019/2020 approved budget book”, Ministerio de Finanzas y Planificación, diciembre de 2019, que puede consultarse en <http://grss-mof.org/documents/1>.

¹²² Se puede encontrar más información general sobre los 28.000 barriles diarios asignados al Sudán como pago de las tasas de procesamiento, transporte y tránsito en [S/2018/1049](#). Entrevistas con personal de la UNMISS, diplomáticos extranjeros, un representante del Fondo Monetario Internacional y fuentes confidenciales, en Yuba y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020. Véase también Okech Francis, “China gets a sixth of South Sudan oil output to build highways”, Bloomberg, 5 de abril de 2019; Ministerio de Finanzas y Planificación de Sudán del Sur, “National budget brief: South Sudan 2019”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, abril de 2019, disponible en <http://grss-mof.org/documents/>; y discurso del Presidente de Sudán del Sur con motivo de la apertura del segundo período de sesiones del órgano legislativo nacional de transición, 14 de mayo de 2019.

Expertos calcula que el gobierno dispondrá de alrededor de 49.000 barriles diarios de petróleo crudo para la venta en 2020, una cantidad que representa unos 980 millones de dólares a lo largo del año¹²³.

87. Para impulsar la recaudación de ingresos y atraer nuevas inversiones en el desarrollo del sector del petróleo en el país, el Ministerio del Petróleo planea subastar más de una docena de nuevos bloques petrolíferos en marzo de 2020 y firmar acuerdos de exploración y producción compartida¹²⁴. Mediante el acuerdo de este tipo más reciente, firmado por el Gobierno con Sudáfrica en mayo de 2019, se creó una empresa conjunta, “Nile orange energy project”, para explorar el bloque B2 de Yonglei y construir una refinería¹²⁵. Como parte de la empresa conjunta, se abrió una oficina en Yuba con el fin de apoyar el proyecto “Nuevo Horizonte” para construir la refinería¹²⁶.

88. Como se indicó en el informe provisional de 2019 del Grupo de Expertos, no se han hecho públicos los detalles del acuerdo entre las dos entidades de propiedad estatal, el Fondo de Combustible Estratégico de Sudáfrica y Nile Petroleum Corporation de Sudán del Sur. El Grupo de Expertos ha solicitado en dos ocasiones a Sudáfrica una copia del acuerdo, que debería estar a disposición del público con arreglo a los términos del acuerdo de paz revitalizado¹²⁷. A pesar de haber recibido un acuse de recibo, hasta la fecha el Grupo de Expertos no ha obtenido una respuesta sustantiva¹²⁸.

D. Recursos públicos no contabilizados mediante la asistencia en especie a las fuerzas de seguridad

89. A fin de proteger los campos petrolíferos del país, los consorcios petroleros que actúan en Sudán del Sur (Dar Petroleum Operating Company, Greater Pioneer Operating Company y Sudd Petroleum Operating Company) han proporcionado fondos específicos para seguridad al Ministerio del Petróleo. Los tres consorcios petroleros, que funcionan de manera independiente, pero están parcialmente controlados por el Gobierno, no han pagado directamente a las fuerzas de seguridad de Sudán del Sur¹²⁹. Este es el procedimiento operativo normal, en virtud del cual los consorcios de petróleo transfieren fondos al Gobierno una vez

¹²³ Sobre la base del precio medio de unos 55 dólares por barril de petróleo crudo Brent en febrero de 2020 y de 49.000 barriles al día de las mezclas Dar y Nilo del país, que equivalen a unos 82 millones de dólares al mes. Véase Administración de Información Energética de los Estados Unidos, “South Sudan Open Data”. Datos disponibles en eia.gov/opendata (consultados en febrero de 2020).

¹²⁴ Entrevista con un representante del Ministerio del Petróleo, en Yuba, noviembre de 2019. Véase también Denis Dumo, “South Sudan to offer 14 oil blocks for licensing by Q1 2020 – oil minister”, Reuters News, 29 de octubre de 2019.

¹²⁵ Entrevistas con empresarios del sector del petróleo, personal de la UNMISS y un analista del sector, en Yuba y Nairobi, septiembre a noviembre de 2019.

¹²⁶ Entrevistas con diplomáticos extranjeros, en Yuba, noviembre de 2019, y sobre la base de documentos públicos consultados a través del boletín de licitaciones y el sitio web del Tesoro Nacional de Sudáfrica.

¹²⁷ En el capítulo V, artículo 13.10 de la Ley del petróleo se dispone que la Empresa Nacional de Petróleo y Gas, de conformidad con las normas internacionales, pondrá a disposición del público sus cuentas anuales auditadas, la cuota de producción, los procedimientos de comercialización, el precio de venta, las tasas pagadas o recibidas por las actividades y el transporte relativos al petróleo y los acuerdos y subcontrataciones sobre el petróleo.

¹²⁸ El Grupo de Expertos se dirigió por escrito al Gobierno de Sudáfrica el 23 de octubre de 2019 y el 27 de enero de 2020.

¹²⁹ Entrevistas con representantes del Ministerio del Petróleo y fuentes confidenciales del sector del petróleo, en Yuba y Nairobi y por teléfono, septiembre de 2019 a enero de 2020.

que el Ministerio del Petróleo ha estimado el costo de proteger los campos petrolíferos¹³⁰. Después, los consorcios petroleros asignan una partida de “seguridad” en sus presupuestos operacionales y pagan al Ministerio de Finanzas y Planificación, que transfiere fondos a los servicios de seguridad a través del proceso presupuestario habitual¹³¹.

90. Una combinación de servicios privados de seguridad, fuerzas del Servicio Nacional de Seguridad y soldados de las FDPSS protegen las operaciones petroleras del país, y el Grupo de Expertos ha corroborado que gran parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno habían recibido apoyo en especie de los consorcios petroleros¹³². Las fuerzas del Servicio Nacional de Seguridad y las unidades de protección del petróleo de las FDPSS han aceptado donaciones en especie de combustible, atención médica, alimentación, vehículos y demás suministros¹³³. Esta asistencia no se contabilizó en el presupuesto para 2019/20 y no se ha divulgado públicamente como se dispone en la Ley de gestión de los ingresos derivados del petróleo, en cuyo capítulo IX, artículo 34.1 se establece que los licenciarios, contratistas y subcontratistas deberán informar anualmente de todos los pagos, monetarios o en especie, que se hayan hecho a organismos del Estado en relación con las actividades petroleras.

91. Esta asistencia material directa a las fuerzas de seguridad del Gobierno constituye una forma de realizar pagos locales considerables de carácter no monetario a las fuerzas del Gobierno, que hace que las donaciones sean vulnerables a la malversación y el uso indebido, porque no están incluidas en el proceso presupuestario oficial del país.

E. Ingresos independientes vulnerables ante el uso indebido por el Servicio Nacional de Seguridad

92. Para entregar las donaciones en especie y prestar otros servicios para los campos petrolíferos, los consorcios petroleros han acudido a la contratación privada de empresas, incluidas algunas empresas controladas por el Servicio Nacional de Seguridad¹³⁴. Sudd (Suud) Security Services Co. Ltd. y Sudd Services and Investment Co. Ltd., que son dos empresas separadas controladas por el Servicio Nacional de Seguridad (véase S/2019/301), han proporcionado seguridad en los centros de operaciones y pozos de petróleo de Greater Pioneer Operating Company¹³⁵. Además, en el cuartel general de Greater Pioneer Operating Company en Yuba, Sudd (Suud) Security Services presta servicios de seguridad,

¹³⁰ Entrevistas con representantes del Ministerio del Petróleo y fuentes confidenciales, en Yuba, noviembre de 2019.

¹³¹ Documento confidencial que obra en poder del Grupo de Expertos y entrevistas con representantes del Ministerio del Petróleo, diplomáticos extranjeros y una fuente confidencial, en Yuba, septiembre a noviembre de 2019.

¹³² Entrevistas con personal de la UNMISS, un diplomático extranjero, analistas del sector del petróleo, petrolíferos y la sociedad civil en el Alto Nilo y fuentes confidenciales implicadas en la seguridad de los campos, en Yuba, Bentiu y Nairobi y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

¹³³ Documentos confidenciales examinados por el Grupo de Expertos y entrevistas con representantes del Ministerio del Petróleo, fuentes confidenciales, la sociedad civil y analistas del sector, en Yuba y Nairobi y por teléfono, septiembre de 2019 a enero de 2020.

¹³⁴ Entrevistas con analistas del sector del petróleo y fuentes confidenciales, en Yuba y Nairobi y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

¹³⁵ Documentos confidenciales en poder del Grupo de Expertos y entrevistas con un diplomático extranjero, un periodista de Sudán del Sur y fuentes confidenciales, en Yuba y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

conductores y algunos trabajos de mantenimiento¹³⁶. El jefe de seguridad de Greater Pioneer Operating Company, Luis Miyar, es un General de Brigada de la Oficina de Seguridad Interna¹³⁷.

93. Los empleados de Sudd (Suud) Security Services, muchos de los cuales son o han sido miembros del Servicio Nacional de Seguridad, han trabajado en puestos de seguridad y mantenimiento en los campos petrolíferos de Dar Petroleum Operating Company. Otras empresas privadas controladas por el Servicio Nacional de Seguridad han firmado contratos con Dar Petroleum Operating Company, incluida National Oil and Gas Co. Ltd¹³⁸. Según la información obtenida de entrevistas con fuentes del Grupo de Expertos que están familiarizadas con los contratos de adquisición, el Ministerio del Petróleo tiene amplia discreción para indicar a los consorcios petroleros qué empresas deben seleccionar, como las empresas controladas por el Servicio Nacional de Seguridad, para que reciban contratos de servicios en los campos petrolíferos¹³⁹. El Servicio Nacional de Seguridad también asigna a personal de enlace en las instalaciones de los campos petrolíferos y en las oficinas de Yuba de Dar Petroleum Operating Company y Greater Pioneer Operating Company¹⁴⁰.

94. Sobre la base de informes anteriores acerca de la propiedad de las empresas del Servicio Nacional de Seguridad (véase [S/2019/301](#)), el Grupo de Expertos ha estimado que las empresas controladas por el Servicio Nacional de Seguridad habían recibido al menos 13,6 millones de dólares en concepto de contratos relacionados con los campos petrolíferos a través de esta corriente de ingresos independiente¹⁴¹. El Grupo de Expertos observa que esto ha socavado la paz y la seguridad de Sudán del Sur porque el Servicio Nacional de Seguridad ha dejado de involucrarse en el proceso de aplicación del acuerdo de paz, como se mencionó anteriormente y en los informes anteriores del Grupo de Expertos (véanse [S/2019/301](#) y [S/2019/897](#)).

F. Extracción ilícita de oro

95. Decenas de miles de mineros artesanales sursudaneses buscan oro de aluvión en los lechos de los ríos del país y cavan pozos poco profundos en busca de pepitas y sedimentos de oro en Ecuatoria Oriental y Ecuatoria Central, como señaló el Grupo de Expertos en informes anteriores (véanse [S/2017/979](#) y [S/2019/301](#))¹⁴². La minería artesanal proporciona medios de subsistencia a la comunidad, a pesar de que la práctica es intrínsecamente informal. El Ministerio de Minería y el Ministerio

¹³⁶ Entrevistas con fuentes confidenciales relacionadas con gastos del petróleo, en Yuba y Nairobi y por teléfono, septiembre de 2019 a enero de 2020.

¹³⁷ Sobre la base de dos documentos confidenciales examinados por el Grupo de Expertos.

¹³⁸ Véase [S/2019/301](#) y sobre la base de entrevistas con fuentes confidenciales, en Nairobi, noviembre de 2019.

¹³⁹ Entrevistas con un analista de un centro de estudio, un diplomático extranjero y fuentes confidenciales, en Yuba y Nairobi y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁴⁰ Entrevistas con empresarios del sector del petróleo y fuentes confidenciales, en Yuba y Nairobi y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁴¹ Cálculos sobre la base de documentos confidenciales examinados por el Grupo de Expertos y entrevistas con fuentes confidenciales, en Yuba y Nairobi y por teléfono, septiembre de 2019 a enero de 2020.

¹⁴² Según la Ley de minería, “minería artesanal” se refiere a las operaciones mineras que utilizan medios tradicionales o consuetudinarios; no abarca la extracción de ningún mineral que se encuentre a más de 10 m por debajo de la superficie o cuya extracción requiera el uso de explosivos. Entrevistas con representantes del Ministerio de Minería, empresarios que participan en el comercio de oro y un periodista local, en Yuba y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

de Comercio carecen de datos sobre la producción y el comercio de oro del país¹⁴³. Esta falta de gestión del sector de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala ha causado que el comercio sea vulnerable a la explotación ilícita, una vulnerabilidad que fue reconocida por el Órgano Legislativo Nacional de Transición en su examen del presupuesto del país¹⁴⁴.

96. Apenas se han regulado y gravado la extracción y el comercio de oro¹⁴⁵. Anteriormente, el Ministerio de Minería emitía licencias para autorizar a los comerciantes de minerales a comerciar con oro, pero dejó de hacerlo en 2018 debido a que los comerciantes no presentaban informes detallados sobre sus actividades comerciales. El Ministerio no ha emitido licencias de exportación en 2019 y 2020, lo que indica que el oro procedente de Sudán del Sur que se vende en el extranjero es de procedencia ilícita¹⁴⁶. En algunos casos, la explotación del oro ha sido una fuente de ingresos no contabilizados, en particular para los administradores locales de Kapoeta, que han actuado como supervisores del acceso de las empresas sursudanesas e internacionales dedicadas a la minería mecanizada¹⁴⁷.

G. Uso ilegal de equipos industriales y mineros sin licencia en Ecuatoria Oriental

97. Alrededor de la localidad de Kapoeta, el epicentro de la industria del oro, se ha utilizado maquinaria pesada para la extracción de oro¹⁴⁸. Si bien el uso de equipo industrial es legal en Gorom (Ecuatoria Central) (véase S/2019/897), la práctica es ilegal en Kapoeta, porque solo el Ministerio de Minería tiene autoridad para expedir licencias que permitan el uso de maquinaria en las minas del país. El Ministerio no ha concedido ninguna licencia de minería a pequeña escala, que son las licencias que autorizarían las actividades de minería mecanizada en Kapoeta¹⁴⁹.

98. El Grupo de Expertos ha confirmado el uso de equipo de minería industrial en varios lugares a lo largo del río Singaita en las proximidades de Luru (también conocido como Naguro o Ngawuru), al sur de la localidad de Kapoeta, en el condado de Budi (véase la figura a continuación)¹⁵⁰. El Grupo de Expertos observa

¹⁴³ Entrevistas con representantes del Ministerio de Minería y el Banco de Sudán del Sur, un analista del sector, la sociedad civil y fuentes confidenciales, en Yuba y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020; y Fondo Monetario Internacional, “Republic of South Sudan: technical assistance report – report on external sector statistics mission”, informe sobre el país núm. 20/10, enero de 2020.

¹⁴⁴ De conformidad con el capítulo IX de la Ley de minería, las autoridades estatales, como las administraciones y autoridades locales, tienen derecho a regular la minería artesanal; Órgano Legislativo Nacional de Transición de Sudán del Sur, “Fiscal year 2019/20 budget report in the third reading stage”, 21 de agosto de 2019; documento que obra en poder del Grupo de Expertos.

¹⁴⁵ Entrevistas con empresarios del sector de la minería y fuentes confidenciales, en Yuba y por teléfono, septiembre de 2019 a enero de 2020.

¹⁴⁶ Entrevistas con representantes del Ministerio de Minería y una fuente confidencial, en Yuba, noviembre de 2019.

¹⁴⁷ Entrevistas con personal de la UNMISS, la sociedad civil, representantes del MLPS-O, un periodista de Yuba, un diplomático extranjero y una fuente confidencial, en Yuba, Entebbe, Nairobi y Washington D. C. y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁴⁸ Entrevistas con representantes del Ministerio de Minería, empresarios y mineros del sector del oro en Sudán del Sur, la sociedad civil y una fuente confidencial, en Yuba y Nairobi y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁴⁹ En el capítulo II, artículo 8.1 de la Ley de minería se dispone que los títulos de minerales para el reconocimiento, la exploración, la minería a pequeña escala, la minería a gran escala y la retención serán autorizados por el Ministro, con el asesoramiento del Director General de la Dirección de Desarrollo Minero.

¹⁵⁰ Entrevistas con un empresario de la minería, personal de la UNMISS y una fuente confidencial, en Entebbe y por teléfono, noviembre y diciembre de 2019.

que la empresa internacional que ostenta una licencia de exploración de esta concesión no participa en la extracción.

99. De conformidad con las entrevistas y pruebas examinadas por el Grupo de Expertos, entre el equipo industrial utilizado se han encontrado equipos específicos de minería (una planta móvil de lavado de oro, una criba de malla giratoria de lavado de oro a pequeña escala y una draga de tipo cubo para la minería de oro, entre otros) y equipos de construcción, como topadoras, tractores, excavadoras y retroexcavadoras¹⁵¹. El Grupo de Expertos observa que, en comparación con la minería artesanal, el uso de equipo industrial para la minería aumenta considerablemente el volumen de oro aluvial extraído, así como las oportunidades de comercio ilícito del mineral.

100. Además de la minería mecanizada ilegal, el Grupo de Expertos ha confirmado que la mayoría de las actividades de extracción de oro se han producido sin licencias expedidas por el Ministerio de Minería en la zona de Luru¹⁵². En lugar de ello, la administración local de Kapoeta ha expedido licencias de exploración y extracción mineras, según la información obtenida de documentos examinados por el Grupo de Expertos y entrevistas con empresas y empresarios del sector de la minería de Sudán del Sur¹⁵³.

101. El exgobernador de Kapoeta, Louis Lobong Lojore, negoció la expedición de licencias de extracción directamente con empresas locales, prescindiendo del Ministerio de Minería. Por ejemplo, la administración de Kapoeta emitió una “licencia operacional de minería o prospección a pequeña escala” de un año de duración en favor de Afro Mining Company Ltd., que autorizaba a la empresa a extraer oro en cualquier lugar del antiguo estado de Kapoeta¹⁵⁴. Sin embargo, el Ministerio de Minería no ha concedido una licencia a Afro Mining, según los registros y datos públicos del Ministerio¹⁵⁵. Además, Lily Gold Mining Company, que había solicitado una licencia del Ministerio de Minería, pero no la había recibido, ha realizado actividades de minería en Kapoeta sin licencia¹⁵⁶.

¹⁵¹ Documentos confidenciales y entrevistas con representantes del Ministerio de Minería, empresarios del sector de la minería, la sociedad civil, un diplomático extranjero y una fuente confidencial, en Yuba, Entebbe y Washington D. C. y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁵² Entrevistas con representantes del Ministerio de Minería, empresarios del sector de la minería y una fuente confidencial, en Yuba y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁵³ Entrevistas con representantes del Ministerio de Minería, empresarios del sector de la minería, la sociedad civil y fuentes confidenciales, en Yuba y Entebbe y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁵⁴ Documento confidencial que obra en poder del Grupo de Expertos y entrevistas con la sociedad civil, personal del Ministerio de Minería y fuentes confidenciales, en Yuba, Entebbe y Nairobi y por teléfono, septiembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁵⁵ Documento confidencial que obra en poder del Grupo de Expertos; entrevista con un representante del Ministerio de Minería, en Yuba, noviembre de 2019; y el catastro minero de Sudán del Sur, que puede consultarse en <http://portals.flexicadastre.com/southsudan/>.

¹⁵⁶ Entrevistas con representantes del Ministerio de Minería, un empresario de Sudán del Sur y fuentes confidenciales, en Yuba y Entebbe y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

Aparente campo minero de extracción de oro en Lauru (Sudán del Sur)



Image Source
WorldView-2, 2020-02-25T08:22:26, (C) COPYRIGHT 2020 DigitalGlobe, Inc.
GeoEye-1, 2018-09-26T08:20:55, (C) COPYRIGHT 2020 DigitalGlobe, Inc.
UNITED NATIONS Map No.4606.1 (February 2020)

Las fronteras y los nombres que figuran en el mapa y las designaciones que se utilizan en él no implican una aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas.
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Sección de Información Geoespacial

H. Explotación y comercio ilegales de madera en Ecuatoria Oriental

102. Como se indicó en los informes anteriores del Grupo de Expertos, la explotación y el comercio ilegales de madera (particularmente de teca, caoba y afzelia africana) por parte de las FDPSS y el ELPS-O en las zonas bajo su control es un riesgo para la paz, la seguridad y la estabilidad de Ecuatoria Central y Ecuatoria Oriental (véanse [S/2019/301](#) y [S/2019/897](#)).

103. Para luchar contra la explotación ilegal de los recursos naturales del país, el Órgano Legislativo Nacional de Transición pidió en 2019 que se produjera un marcado incremento de los aranceles sobre el comercio de madera y estimó que un arancel de solo

6,50 dólares por un camión cargado de madera era demasiado bajo¹⁵⁷. De acuerdo con los datos de estadísticas comerciales oficiales de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade), en 2018 el volumen de teca exportado desde Sudán del Sur a Uganda solo alcanzó un total de 34 toneladas. Esta cifra es aproximadamente equivalente a dos camiones llenos de madera, lo que indica que se está produciendo un comercio ilícito considerable que no se registra. Además, el Órgano Legislativo Nacional de Transición prohibió la tala y exportación de caoba¹⁵⁸.

104. El Grupo de Expertos confirmó que la División 7 de las FDPSS siguió beneficiándose de la tala ilegal, ofreciendo protección a los sitios de tala de las empresas madereras y ofreciendo escoltas militares a los vehículos de transporte de troncos hasta la frontera con Uganda en Ecuatoria Oriental¹⁵⁹. Los principales lugares donde las FDPSS brindaron seguridad a las actividades de tala ilegal en Ecuatoria Oriental fueron, entre otros, los distritos de Imilai, Obbo, Omura, Kittra, Imoti y Palabe y la zona de Geria, en el condado de Ikotos¹⁶⁰.

105. En Ecuatoria Oriental, las FDPSS y funcionarios locales han colaborado en el comercio ilegal de madera. En relación con la explotación ilícita de los bosques del país, el Grupo de Expertos ha realizado un seguimiento de información que indicaba que muchas de las empresas madereras habían recibido sus licencias del Ministerio de Agricultura y Silvicultura en Yuba y también habían recibido aprobación adicional del Ministro de Agricultura del antiguo estado de Torit¹⁶¹. Con estas aprobaciones, los jefes de la División 7 de las FDPSS habían brindado protección armada para los sitios de tala y el transporte de troncos. Los oficiales de las FDPSS también habían ayudado a las empresas a negociar con los comisionados de los condados en las zonas de tala¹⁶².

106. La porosidad de la frontera del país con Uganda ha permitido el comercio ilegal de madera. El Grupo de Expertos corroboró que algunos comerciantes y empresas internacionales y de Sudán del Sur se habían beneficiado de relaciones informales con autoridades locales en el lado sursudanés de la frontera, donde los funcionarios habían permitido el paso de cargamentos de madera sin ninguna inspección¹⁶³. Por ejemplo, a mediados de 2019, el Ministerio de Finanzas del antiguo estado de Torit cerró temporalmente las oficinas de la Dirección Nacional de Ingresos de Nimule en varias ocasiones. Como resultado de ello, los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos no cobraron impuestos a los camiones que transportaban teca a Uganda¹⁶⁴. El precio de mercado de 1 m³ de teca en el mercado de Uganda se mantuvo entre 400 y 650 dólares en enero de 2020¹⁶⁵.

¹⁵⁷ Sudán del Sur, Órgano Legislativo Nacional de Transición, “Fiscal year 2019/20 budget report in the third reading stage”, 21 de agosto de 2019; documento que obra en poder del Grupo de Expertos.

¹⁵⁸ Véase <https://comtrade.un.org>.

¹⁵⁹ Entrevistas con un miembro del M/ELPS-O, representantes comunitarios y un comerciante de teca, en Torit y Yuba, enero y febrero de 2020.

¹⁶⁰ Entrevistas con un comerciante de teca, un representante comunitario y un funcionario local, en Yuba, Torit y Kampala, enero de 2020.

¹⁶¹ Entrevistas con un miembro del M/ELPS-O, representantes comunitarios y un comerciante de teca, en Torit y Yuba, enero y febrero de 2020.

¹⁶² Entrevistas con un miembro del M/ELPS-O y personal de organizaciones no gubernamentales, en Torit y Yuba, enero y febrero de 2020.

¹⁶³ Entrevistas con un funcionario local, un agente del Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur, representantes comunitarios y miembros del M/ELPS-O, en Torit, enero de 2020.

¹⁶⁴ Entrevistas con personal del Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur, representantes del M/ELPS-O, un funcionario local y un miembro del personal de una organización no gubernamental, en Torit, enero de 2020.

¹⁶⁵ Entrevistas con un comerciante de teca y líderes comunitarios, en Yuba y Torit, enero de 2020. Véase también Organización Internacional de las Maderas Tropicales, “Tropical Timber Market Report”, vol. 23, núm. 2, 16 a 31 de enero de 2020. Se puede consultar en www.itto.int/files/user/mis/MIS_16-31_Jan2020.pdf.

107. Los comerciantes de madera del país han utilizado tres rutas nacionales principales para transportar ilegalmente troncos a Uganda: a) Magwe-Aru junction-Nimule; b) Torit-Magwe-Kitgum- Nimule; y c) Magwe-Pawal-Lobone.

I. Tala ilícita: el ejemplo de Lucky Friends Trading and Construction Company

108. El Grupo de Expertos verificó las actividades de tala ilegal de una compañía, Lucky Friends Trading and Construction Company Ltd¹⁶⁶. Desde 2018, Lucky Friends ha explotado concesiones en el distrito de Ketire (zona de Geria, Ecuatoria Oriental). Los miembros de la comunidad de Ketire se oponían a la tala, pero Lucky Friends hizo caso omiso de esas preocupaciones y la comunidad no ha sido indemnizada por la explotación ilegal¹⁶⁷. En junio de 2019, el Comisionado del distrito de Ketire convocó a funcionarios locales para llevar a cabo un debate público con los miembros de la comunidad sobre la cuestión de la indemnización por la tala realizada por Lucky Friends. Posteriormente, el General de División Johnson Juma, jefe de administración y finanzas de las FDPSS, a quien el Grupo de Expertos mencionó en su informe provisional de 2019 por sus intereses comerciales en la tala en esa zona, criticó al Comisionado, que fue obligado a dejar el cargo¹⁶⁸.

109. La Tercera Brigada de la División 7 de las FDPSS, cuyo cuartel general se encuentra en Torit, proporcionó protección armada en la frontera con Uganda para el transporte de troncos por Lucky Friends. Las FDPSS proporcionaron dos soldados para cada uno de los camiones, con un pago en torno a 900 o 1.000 dólares por camión¹⁶⁹.

110. En junio de 2019, el Gobernador del antiguo estado de Torit destituyó al Comisionado encargado de los ingresos por no haber informado sobre las pérdidas financieras causadas por la tala ilegal y por haber firmado contratos no transparentes con empresas madereras¹⁷⁰. Se estimó que las pérdidas totales causadas por la tala ilegal en cinco condados sobrepasaban los 100.000 dólares¹⁷¹, incluidos 56.000 dólares en la zona de Geria (condado de Ikotos), donde Lucky Friends ha llevado a cabo sus actividades¹⁷². Según la información obtenida en las entrevistas realizadas por el Grupo de Expertos, el papel de Lucky Friends se mencionó en relación con la destitución del Comisionado¹⁷³.

111. El Grupo de Expertos confirmó que Lucky Friends también había operado en Ecuatoria Central, en particular en la zona de Loka (condado de Lainya). Para proteger estos sitios de tala, Lucky Friends de Ecuatoria recurrió a las Fuerzas no

¹⁶⁶ Véase el anexo confidencial 2.

¹⁶⁷ Entrevistas con representantes del M/ELPS-O, representantes comunitarios y el personal de organizaciones no gubernamentales, en Kampala, Yuba y Torit, enero de 2020.

¹⁶⁸ Entrevistas con un representante del M/ELPS-O, representantes comunitarios y el personal de organizaciones no gubernamentales, en Kampala, Yuba y Torit, diciembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁶⁹ Entrevistas con un representante del M/ELPS-O, representantes comunitarios, el personal de organizaciones no gubernamentales y un funcionario local, en Torit, enero de 2020.

¹⁷⁰ Entrevistas con un funcionario local, un comerciante de teca y personal de organizaciones no gubernamentales, en Yuba y Torit, septiembre de 2019 a enero de 2020. Véase también Radio Tamazuj, “Torit revenue authority commissioner sacked after exposing corruption”, 9 de junio de 2019.

¹⁷¹ Entrevistas con miembros de la comunidad y un representante del M/ELPS-O, en Yuba y Torit, septiembre de 2019 a febrero de 2020. Véase también Radio Tamazuj, “Torit governor partially reshuffles cabinet”, 26 de agosto de 2019.

¹⁷² Ijoo Bosco, “Vote of no confidence issued against minister of agriculture –Torit”, Eye Radio, 7 de junio de 2019.

¹⁷³ Entrevistas con representantes comunitarios, un representante del M/ELPS-O y personal de organizaciones no gubernamentales, en Torit y Yuba, enero y febrero de 2020.

aliadas de Ecuatoria, una milicia étnica pajulu de carácter local¹⁷⁴. El Grupo de Expertos envió una solicitud de información a la administración de Lucky Friends con respecto a los pagos mencionados y otras actividades ilícitas¹⁷⁵. Hasta la fecha, el Grupo de Expertos no ha recibido respuesta alguna.

IV. Información política actualizada: perspectivas de una paz duradera y la función de la región

112. Los Estados Miembros, especialmente los vecinos de Sudán del Sur, fueron fundamentales para facilitar la formación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado. El avance que supuso el compromiso logrado por los mediadores regionales ha proporcionado la oportunidad para que el Sr. Kiir, el Sr. Machar y otros dirigentes políticos clave inicien el Gobierno de Transición de tres años de duración.

113. No obstante, si bien los esfuerzos internacionales consiguieron superar el estancamiento de la formación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado, los mediadores y signatarios del acuerdo de paz revitalizado han seguido haciendo caso omiso de la aplicación del acuerdo, como se explica más detalladamente en el informe provisional del Grupo de Expertos de 2019. El Grupo de Expertos observa que los Estados Miembros de la región y los signatarios del acuerdo han llegado a arreglos políticos, principalmente de carácter no público, que se han traducido en la aplicación selectiva e incompleta del acuerdo. Este enfoque no ha reconocido la necesidad de instituciones públicas, reformas de la gobernanza económica, una ciudadanía inclusiva, el estado de derecho y la rendición de cuentas y, por tanto, supone un riesgo para el progreso político continuado¹⁷⁶.

A. Compromiso diverso con la aplicación de la paz e iniciativas internacionales

114. A pesar de la firma del acuerdo de paz revitalizado en septiembre de 2018 bajo la autoridad de la IGAD, el Gobierno de Transición solo pudo formarse, tras prolongadas demoras, 17 meses más tarde. En múltiples ocasiones, las intervenciones políticas de último minuto de la IGAD prevalecieron sobre el marco y los plazos acordados en el acuerdo y las adiciones correspondientes. Por ejemplo, cuando, en noviembre de 2019, los signatarios acordaron aprobar una prórroga de 100 días del período previo a la transición, la IGAD se comprometió a realizar un examen del estado de la aplicación 50 días después del inicio del período¹⁷⁷. Este examen no se ha producido.

115. Las diferencias en el apoyo internacional a la ejecución de las tareas previas a la transición han reflejado el apoyo irregular de la región a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad y prorrogadas con arreglo a la resolución 2471 (2019). El Grupo de Expertos observa, por ejemplo, que a pesar de los llamamientos realizados en octubre de 2019 por la anterior Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) relativa a Sudán del Sur

¹⁷⁴ Entrevistas con representantes del FSN, el MLPS-AD y el M/ELPS-O y representantes comunitarios, en Kampala, Yuba y Torit y por teléfono, diciembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁷⁵ Documento que obra en poder del Grupo de Expertos.

¹⁷⁶ Entrevistas con representantes de alto nivel del Gobierno, el M/ELPS-O, la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur y la Alianza de Oposición de Sudán del Sur, la sociedad civil, diplomáticos extranjeros y personal de inteligencia regional, en Yuba, Nairobi, Kampala y Roma y por teléfono, enero y febrero de 2020.

¹⁷⁷ *Ibid.*

durante una visita a la región, las entidades aduaneras de los Estados vecinos no han presentado informes de inspecciones relacionadas con el embargo de armas al Comité con arreglo al párrafo 10 de la resolución [2428 \(2018\)](#), renovado en la resolución [2471 \(2019\)](#).

B. Violación del embargo de armas por el ejército de Uganda

116. El influyente papel político de los principales garantes, entre ellos Uganda, a la hora de apoyar los esfuerzos de paz en Sudán del Sur ha supuesto un contraste con la presencia no autorizada de militares ugandeses en el país. Desde 2018, el Grupo de Expertos ha informado sistemáticamente sobre la presencia de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en la parte meridional de Sudán del Sur (véanse [S/2018/1049](#), [S/2019/301](#) y [S/2019/897](#)).

117. En el período sobre el que se informa, el Grupo de Expertos recibió múltiples testimonios corroborados de la presencia de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en diversas zonas de Ecuatoria Central, incluida la zona de Gulumbi entre Morobo y Kanga. El Grupo de Expertos comprobó también múltiples testimonios de entradas nocturnas de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en Sudán del Sur a través de cruces fronterizos no oficiales, como los de Goboro y Garamba (Ecuatoria Central)¹⁷⁸.

118. El Grupo de Expertos observa que, desde la imposición por el Consejo de Seguridad del embargo de armas el 13 de julio de 2018, Uganda no ha solicitado ninguna exención al Comité establecido en virtud de la resolución [2206 \(2015\)](#) para permitir la entrada de fuerzas militares en el territorio de Sudán del Sur, como se requiere en virtud del párrafo 5 de la resolución [2428 \(2018\)](#), renovado por la resolución [2471 \(2019\)](#).

C. Mediación política y violación del embargo de armas por el Sudán

119. El Vicepresidente del Consejo Soberano del Sudán, Teniente General Mohamed Hamdan Dagalo (conocido como Hemedti), ha contribuido a facilitar la formación del nuevo Gobierno de Sudán del Sur, acompañando al Sr. Machar y garantizando su seguridad en múltiples visitas a Yuba en el marco de los preparativos para la formación del Gobierno. Al mismo tiempo, el Teniente General Hemedti ha proseguido las conversaciones de paz en Yuba con los grupos armados sudaneses, incluido el Frente Revolucionario Sudanés y la facción de Abdelaziz al-Hilu del MLPS-N.

120. Según múltiples fuentes que han participado en ambas actividades de mediación, la relación entre la aplicación del acuerdo de paz revitalizado y las conversaciones de paz relativas al Sudán ha llegado a ser inextricable¹⁷⁹. Por ejemplo, el Teniente General Hemedti ha intentado sacar provecho de su respaldo al Sr. Machar para pedir el apoyo de Yuba con el fin de suavizar la posición del líder del grupo armado facción de Abdelaziz al-Hilu del MLPS-N, Abdelaziz al-Hilu, que

¹⁷⁸ Entrevistas con la sociedad civil, líderes comunitarios, personal de organizaciones no gubernamentales internacionales, personal del ELPS-O y el FSN, personal de inteligencia regional y fuentes confidenciales, en Yuba, Kampala y Nairobi y por teléfono, noviembre de 2019 a febrero de 2020.

¹⁷⁹ Entrevistas con personal de inteligencia regional, representantes del M/ELPS-O y la facción de Abdelaziz al-Hilu del MLPS-N y fuentes confidenciales, en Yuba y por teléfono, octubre de 2019 a febrero de 2020.

reside en Sudán del Sur¹⁸⁰. Múltiples fuentes del M/ELPS-O comunicaron al Grupo de Expertos que la entrada de última hora del Sr. Machar en el Gobierno había sido forzada por el Sudán, Uganda y la comunidad internacional y que Machar era un prisionero en Yuba¹⁸¹. Esta intrincada relación ha conllevado el riesgo de que la aplicación del acuerdo dependa de los progresos de las conversaciones de paz del Sudán.

121. Además, como ha indicado el Grupo de Expertos en los párrafos 39 y 40, el Servicio de Inteligencia General del Sudán ha violado el embargo de armas impuesto en la resolución 2428 (2018) y renovado en la resolución 2471 (2019). El Grupo de Expertos informó a las autoridades sudanesas de sus conclusiones. El Sudán respondió señalando que la información acerca de la participación de Green Flag Aviation en el contrabando de armas era falsa y añadió que Green Flag Aviation solo transportaba un uniforme militar a la República de Sudán del Sur en el marco de la cooperación entre los dos países¹⁸². El Grupo de Expertos observa que el suministro de uniformes militares a Sudán del Sur exige la presentación de una solicitud de exención al Comité establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) y la aprobación por el Comité de dicha solicitud con antelación al suministro, de conformidad con el párrafo 5 f) o 5 g) de la resolución 2428 (2018), pero el Comité no ha recibido tal solicitud¹⁸³.

D. Riesgos relacionados con el número de estados y sus límites

122. El cambio en el número de Estados de 32 a 10, que fue acordado y anunciado al margen del marco del acuerdo de paz revitalizado, ha planteado nuevos riesgos políticos, económicos y de seguridad. La formación de las dos nuevas zonas administrativas de Pibor y Ruweng, en particular, suscitó inmediatamente la resistencia de la oposición, porque el estatuto especial concedido a esos territorios se basaba en incentivos económicos y de seguridad¹⁸⁴. Fuentes del Gobierno informaron al Grupo de Expertos de que los partidarios de la línea dura en el bando del Sr. Kiir, así como exgobernadores de los 32 estados y dirigentes de la comunidad dinka, se oponían a la decisión final del Sr. Kiir de volver a la cifra de 10 estados¹⁸⁵.

123. La decisión del Sr. Kiir de crear la zona administrativa de Ruweng separada del territorio del estado de Unidad, como sucedía con los límites de los diez estados originales, tiene consecuencias económicas para las comunidades. Aproximadamente el 80 % de los pozos de petróleo operados por Greater Pioneer Operating Company se encuentran en la zona administrativa de Ruweng¹⁸⁶. Con arreglo a la Ley de gestión de los ingresos procedentes del petróleo, los estados productores de petróleo tienen derecho al 2 % de los ingresos del petróleo producido

¹⁸⁰ Entrevistas con personal de inteligencia regional y fuentes confidenciales, en Yuba y por teléfono, enero y febrero de 2020.

¹⁸¹ Entrevistas con representantes de alto nivel del M/ELPS-O, por teléfono, febrero de 2020.

¹⁸² Nota verbal de fecha 14 de febrero de 2020 de la Misión Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas, en respuesta a una comunicación oficial del Grupo de Expertos de fecha 31 de enero de 2020.

¹⁸³ El Comité examinó una solicitud de exención similar de otro Estado Miembro en 2019 y aprobó la solicitud.

¹⁸⁴ Entrevistas con representantes de alto nivel del M/ELPS-O y la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur, por teléfono, febrero de 2020.

¹⁸⁵ Entrevistas con representantes del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado, exgobernadores y ancianos y líderes comunitarios, en Yuba y Nairobi y por teléfono, febrero de 2020.

¹⁸⁶ Entrevistas con diplomáticos extranjeros, un periodista de Sudán del Sur, un analista de un centro de estudio y una fuente confidencial, por teléfono, enero y febrero de 2020.

dentro de los límites del estado¹⁸⁷. Por consiguiente, sobre la base de los cálculos presupuestarios y las proyecciones de producción de petróleo de Sudán del Sur para el ejercicio 2019/20, el Grupo de Expertos ha calculado que los estados que producen petróleo en los campos de petróleo gestionados por Greater Pioneer Operating Company tienen derecho a recibir unos 8 millones de dólares en 2020¹⁸⁸. La creación de Ruweng requiere que Unidad comparta esos fondos.

E. Causas estructurales del conflicto que aún no se han afrontado

124. La formación del Gobierno de Transición ha fomentado la oportunidad de entablar un diálogo genuino entre los signatarios del acuerdo de paz revitalizado, siguiendo la lógica del enfoque inclusivo de la política nacional.

125. En este contexto de frágil apertura política, el Grupo de Expertos observa que la mayor parte de los ciudadanos de Sudán del Sur aún no han disfrutado de los beneficios de la paz. Las promesas del Gobierno con respecto a la rendición de cuentas judicial, según lo descrito en el capítulo 5 del acuerdo de paz revitalizado, no se han llevado a la práctica y el establecimiento del tribunal híbrido sobre Sudán del Sur sigue demorándose. En buena parte, los signatarios tampoco han afrontado las dimensiones económicas del conflicto y sus conexiones con el sistema político actual. En el capítulo 4 del acuerdo se describen medidas detalladas para mejorar la gobernanza económica en un país que ha sufrido el desvío de fondos públicos y la malversación del patrimonio público, unas cuestiones con respecto a las cuales el Consejo de Seguridad expresó su preocupación en el párrafo 15 de la resolución [2428 \(2018\)](#), porque ponen en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de Sudán del Sur.

126. La ejecución incompleta y con retraso de las tareas del período previo a la transición ha puesto de relieve la limitada atención que se ha prestado a la justicia de transición, las reformas estructurales de la gobernanza y la obligación de rendir cuentas de las actividades financieras¹⁸⁹. El Grupo de Expertos observa que los capítulos 4 y 5 del acuerdo de paz revitalizado están destinados a luchar contra las irregularidades financieras y la impunidad judicial de larga data. A este respecto, el acuerdo proporciona el marco para afrontar las causas del conflicto, en particular la falta de equidad en la división de los recursos económicos y la mala gobernanza.

127. La iniciativa de la Comunidad de Sant'Egidio en Roma ha sido el único foro para el diálogo abierto entre el Gobierno y los no signatarios, que están preocupados por las causas profundas del conflicto. Sin embargo, según la información obtenida por el Grupo de Expertos, el Sr. Kiir ha planeado convencer a los dirigentes de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur de que regresaran a Yuba y

¹⁸⁷ En el capítulo VIII, artículo 29.1, de la Ley de gestión de los ingresos procedentes del petróleo, que se elaboró para ser incorporado al acuerdo de paz revitalizado, se dispone que los estados productores de petróleo recibirán el 2 % de los ingresos netos del petróleo, mientras que las comunidades de esos estados recibirán el 3 % de los ingresos netos del petróleo.

¹⁸⁸ Cifras calculadas sobre la base de Salvatore Garang Mabiordit, "Budget speech FY 2019/2020", Ministerio de Finanzas y Planificación, junio de 2019, que se puede consultar en <http://www.mofep-grss.org/wp-content/uploads/2019/07/Budget-Speech-draft-FY-19-20-Final.pdf>; y Salvatore Garang Mabiordit, "FY 2019/2020 approved budget book", Ministerio de Finanzas y Planificación, diciembre de 2019, que se consulta en <http://grss-mof.org/documents/1>.

¹⁸⁹ Entrevistas con exrepresentantes del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado, dirigentes del M/ELPS-O, la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur y la Alianza de Oposición de Sudán del Sur, la sociedad civil y fuentes confidenciales, en Yuba, Roma, Nairobi, Kampala, Jartum y Addis Abeba y por teléfono, agosto de 2019 a febrero de 2020.

formaran parte del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado a cambio de cargos públicos y otras oportunidades, incluidos los pagos en efectivo¹⁹⁰.

128. Los dirigentes de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur rechazaron lo que denominaron una mera distribución de puestos políticos entre las élites políticas¹⁹¹. Los dirigentes han decidido que la única manera de lograr una paz duradera es abordando las causas profundas del conflicto de Sudán del Sur¹⁹². El Grupo de Expertos observa que, por primera vez desde el inicio del conflicto en 2013, el Gobierno ha reconocido esta cuestión mediante la firma de la Declaración de Roma sobre el Proceso de Paz en Sudán del Sur (véase el anexo 7)¹⁹³.

V. Aplicación de la congelación de activos y la prohibición de viajar

129. De conformidad con la resolución [2428 \(2018\)](#), prorrogada por la resolución [2471 \(2019\)](#), el Grupo de Expertos ha seguido reuniendo, examinando y analizando información relativa a la aplicación por los Estados Miembros de las medidas de congelación de activos dirigidas a las ocho personas designadas.

130. El Grupo de Expertos envió cartas a Kenya y Uganda, por conducto de sus Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas, con respecto a la aplicación de medidas de congelación de activos y las solicitudes relacionadas con propiedades situadas en Nairobi y Kampala¹⁹⁴. Hasta la fecha, el Grupo de Expertos no ha recibido respuesta alguna. Sin embargo, durante la investigación de los activos de ocho personas designadas, el Grupo de Expertos confirmó que el Teniente Coronel Jok Riak había adquirido una casa en Kampala a través de un apoderado comercial que actuaba en su nombre¹⁹⁵. El Grupo de Expertos observa a este respecto que, entre los criterios establecidos por el Consejo de Seguridad para imponer sanciones individuales, se encuentran los “actos realizados directa o indirectamente por cuenta o en nombre de una persona o entidad designada por el Comité” (resolución [2428 \(2018\)](#), párr. 14 i)).

131. Durante el período sobre el que se informa, el Grupo de Expertos no confirmó que se hubieran producido violaciones de la prohibición de viajar, salvo las dos señaladas en su informe provisional. Sin embargo, Alemania e Italia pidieron en

¹⁹⁰ Entrevistas con el General Thomas Cirillo, el General Paul Malong, Pagan Amum y el General Oyay Deng Ajak, en Roma y Nairobi y por teléfono, enero y febrero de 2020.

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² La delegación gubernamental estuvo encabezada por el enviado presidencial, Barnaba Marial Benjamin, e integrada por el Ministro de Asuntos del Gabinete, Martin Elia Lomuro, el exgobernador de Kapoeta, Luis Lobong, y el Director General de la Oficina de Seguridad Interna del Servicio Nacional de Seguridad, Teniente General Akol Koor Kuc. Entre los participantes de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur en el debate se encontraron el dirigente del FSN, General Thomas Cirillo Swaka, el dirigente del Auténtico MLPS, Pagan Amum, y el dirigente del FEUSS, General Paul Malong Awan, que está sancionado y había recibido una exención de la prohibición de viajar y la congelación de activos para asistir a las conversaciones de paz. Entrevistas con miembros de las dos delegaciones, en Roma, enero de 2020.

¹⁹³ Entrevistas con el General Thomas Cirillo, el General Paul Malong y Pagan Amum, en Nairobi y por teléfono, febrero de 2020.

¹⁹⁴ Documentos que obran en poder del Grupo de Expertos.

¹⁹⁵ Véase el anexo confidencial 3. La dirección física de la propiedad es: Kyadondo estate 249, plot 1215. Entrevistas y correspondencia con un miembro de una organización no gubernamental de Sudán del Sur, un funcionario político de rango mediano del ELPS-O, un coordinador político del ELPS-O en Uganda, un periodista de investigación de Kampala, un miembro en activo del ELPS-O en Nairobi, un miembro de la diáspora sursudanesa en los Estados Unidos, un funcionario político del ELPS-O y un miembro del MLPS-AD, en Kampala y Yuba, octubre de 2019 a enero de 2020. Véase también The Sentry, “War crimes shouldn’t pay: stopping the looting and destruction in South Sudan”, septiembre de 2016.

cuatro ocasiones distintas, en enero, febrero y marzo de 2020, al Comité establecido en virtud de la resolución [2206 \(2015\)](#) que proporcionara al General Paul Malong una exención de la prohibición de viajar y la congelación de activos para que pudiera participar en las conversaciones de paz con la mediación de la Comunidad de Sant'Egidio. El Comité otorgó todas las exenciones.

VI. Recomendaciones

132. El Grupo de Expertos recomienda lo siguiente:

a) Que, a fin de asegurar que los signatarios y los no signatarios del acuerdo de paz mantengan su compromiso con el acuerdo de cese de las hostilidades y resuelvan las diferencias en el marco del acuerdo de paz revitalizado, el Consejo de Seguridad mantenga el embargo de armas impuesto en todo el territorio de Sudán del Sur en virtud de los párrafos 4 a 6 de la resolución [2428 \(2018\)](#) y renovado en la resolución [2471 \(2019\)](#). El Grupo de Expertos considera que la integración de las fuerzas del Gobierno y otros grupos armados en las fuerzas unificadas necesarias es un proceso frágil que estaría en peligro si se permitiera la entrada de armas en el territorio de Sudán del Sur;

b) Que, con el fin de cumplir los objetivos del Consejo de Seguridad de permitir un proceso de notificación o solicitud de exenciones para la entrega de equipos prohibidos por el embargo de armas, el Consejo considere la posibilidad de modificar el embargo de armas mediante la autorización de que el Mecanismo de Vigilancia y Verificación del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad inspeccione los cargamentos que entren en Sudán del Sur y que hayan recibido la aprobación de una exención del Comité establecido en virtud de la resolución [2206 \(2015\)](#), de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 f) de la resolución [2428 \(2018\)](#) del Consejo y reafirmado en la resolución [2471 \(2019\)](#);

c) Que, con el fin de que se respeten los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como el artículo 2.1.10 del acuerdo de paz revitalizado, el Comité envíe una carta a Sudán del Sur para instarlo a: a) abstenerse de utilizar tácticas de guerra que contravengan el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos; b) poner fin a todo reclutamiento forzado de niños o adultos y localizar y liberar de inmediato a cualquier niño o adulto que haya sido reclutado por la fuerza; y c) llevar inmediatamente a cabo una investigación rápida, independiente, imparcial y exhaustiva de las denuncias de violencia sexual y de género y otras formas de violencia, estableciendo la responsabilidad de mando en las zonas bajo el control del Gobierno o las fuerzas de la oposición;

d) Que, con el fin de adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a los riesgos relacionados con las irregularidades financieras y el desvío de patrimonio público, que son un motivo de grave preocupación para el Consejo de Seguridad, como se indica en el párrafo 15 de la resolución [2428 \(2018\)](#), el Comité envíe cartas a las Misiones Permanentes de China, la India y Malasia ante las Naciones Unidas, en calidad de Estados Miembros con un interés económico en la producción de petróleo del país, y a las empresas internacionales que trabajan en la producción o venta del petróleo crudo del país. Habida cuenta de que el Servicio Nacional de Seguridad —que, como informó el Grupo de Expertos, había sido responsable de graves violaciones de derechos humanos (véanse los párrafos 28 a 32 del presente informe y [S/2019/897](#))— controlaba a empresas que recibían contratos de compañías petroleras internacionales, en la carta deberían exponerse las mejores prácticas para realizar actividades empresariales en Sudán del Sur, conforme a lo recomendado por los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos

de las Naciones Unidas, que establecen una norma global reconocida para prevenir y afrontar el riesgo de efectos negativos en los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial¹⁹⁶;

e) Que, con el fin de asegurar que el Gobierno de Transición no siga las prácticas financieras del Comité Nacional Previo a la Transición y de tomar medidas inmediatas para impedir la malversación de recursos públicos, que pone en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de Sudán del Sur, el Comité aliente a los Estados Miembros que deseen proporcionar asistencia financiera o en especie al Gobierno de Transición a recordar las directrices financieras establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción¹⁹⁷. Además, en el capítulo 4 del acuerdo de paz revitalizado se pide que la gestión de los ingresos públicos sea transparente y responsable, en particular en el artículo 4.14.8, en el que se dispone que todos los ingresos, gastos, déficits y deudas del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado se contabilicen y la información esté a disposición del público, requisitos que protegen contra el uso indebido y la malversación de fondos públicos;

f) Que, a fin de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación práctica de las medidas de congelación de activos, el Comité envíe cartas a las Misiones Permanentes de Etiopía, Kenya, el Sudán y Uganda ante las Naciones Unidas para que presenten a sus organismos gubernamentales, en particular, aunque no exclusivamente, a los bancos centrales, los organismos tributarios, los órganos de supervisión financiera y los ministerios de tierras y vivienda, la lista de ocho sursudaneses designados que se encuentran en la lista de sanciones del Comité. El Grupo de Expertos recomienda que el Comité solicite cartas de respuesta de los Estados Miembros mencionados en las que se aborden los pasos que hayan dado para aplicar las medidas de congelación de activos y confiscar los activos de las personas designadas y las personas que actúen en su nombre.

¹⁹⁶ Se puede encontrar más información sobre los Principios Rectores en [A/HRC/17/31](#).

¹⁹⁷ En particular, véase el artículo 62.

VII. Anexos

Annex 1: Map showing the route between Bentiu Protection of Civilians Site (PoC) and Dhorbor (SPLA-IO HQ)¹



¹ GIS original map, amended by the Panel to reflect places that were not shown.

Annex 2: Riverside facility operated by NSS

1. The Panel corroborated the existence of an ISB extrajudicial detention and torture site in Juba, known as ‘Riverside.’² This is located inside the headquarters of the ISB’s Division for Operations, commanded by Major General Achiech Kuot Kuot. The detention facility, Riverside, is run by ISB Major Wol Dhel Thong.³
2. The Riverside detention facility is divided into two. In the lower section of Riverside, a large space known as the ‘verandah’ holds most of the detainees in communal cells. In this section, most detainees have been NSS officers that have been held for varied amounts of time for disciplinary purposes or for disobeying orders. These officers were detained on direct orders from their commanders.⁴ In the ‘verandah,’ ISB officers have also detained civilians under the allegation of their support for opposition forces.⁵ Based on a variety of sources familiar with the operations in Riverside, these detainees have been beaten and tortured, then compelled to pay a ransom to ISB officials in order to be released.⁶ The Panel corroborated that Riverside detention facilities’ commander, Major Thong has coordinated all these detentions and requests for ransoms.⁷
3. In the upper section of Riverside there are four isolation rooms, which are known as ‘shells’ and mostly has contained civilians accused of having political affiliation with the opposition.⁸ The Panel corroborated that detention in the isolation rooms at Riverside has occurred under direct orders from Lt. Gen. Akol Koor Kuc.⁹ In the shells, living conditions have been extremely degraded. The cells are extremely small, preventing detainees from laying down. The detainees have rarely been allowed to leave their cells. While food has been provided twice a day and consists of rice (or posho) and beans, the detainees have had no access to any potable water, and have used river water through a pipe in the toilet for drinking.¹⁰ The prisoners, most of whom have been detained in the shells for long periods of up to one year,¹¹ have not been entitled to any medical attention, nor have the detainees had any access to legal representation or family visits.¹²
4. The Panel confirmed that detainees died in ‘Riverside’, during the reporting period either as a result of the conditions in the facility or from torture. The torture in Riverside has included beatings with objects as well as a practice of tying the legs and arms of detainees and hanging them upside down.¹³ ISB officials transported deceased detainees to SSPDF barracks in Juba known as ‘Giada,’ which includes a cemetery of mass burials of those who died in detention of either the NSS or SSPDF MI.¹⁴

² ‘Riverside’ is located on the Nile river between the Immigration and Police facilities.

³ These facilities also host the “Special Operations” force within the Division for Operations, commanded by Brigadier General Deng Kuac Kuac. This squad is responsible for undercover extrajudicial operations, such as threatening, kidnapping, tortures and killings, against individuals perceived as a threat to political establishment and the ISB. The Panel corroborated that these operations are executed under direct orders from the Director General of the ISB. Interviews; NSS high-ranking officers, confidential sources; locations withheld, by phone; August 2019-February 2020.

⁴ Ibid.

⁵ Interviews with South Sudan’s security sector officers, confidential sources, in locations withheld; August 2019-February 2020.

⁶ Ibid.

⁷ Interviews with NSS high-ranking officers, confidential sources, in locations withheld, by phone; August 2019-February 2020.

⁸ Ibid.

⁹ The Panel interviewed multiple confidential sources who had seen these written orders. Ibid.

¹⁰ Interviews with NSS officers, confidential sources, in locations withheld, by phone; August 2019-February 2020.

¹¹ Ibid.

¹² Detention officers only allow prisoners to go to medical facilities on their own money when they vigorously protest or go on hunger strikes. Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Interviews with South Sudan’s security sector officers, confidential sources, in locations withheld; August 2019-February 2020.

Annex 3: Abuses and actions contrary to the R-ARCSS by the SSPDF MI

1. On 15 February 2019, President Salva Kiir Mayardit appointed Major-General Rin Tueny Mabor Deng, known as ‘Janafil,’ to head the SSPDF Military Intelligence (MI).¹⁵ Since the inception of his mandate, the Panel corroborated that Maj. Gen. Tueny has directed activities that overtly contravene the R-ARCSS and pose a threat to peace and security in South Sudan.
2. Under Tueny’s direct orders, SSPDF MI officers have abducted and detained dozens of civilians, outside the legal judicial process, who the SSPDF MI has accused of either supporting civil society groups that criticized the government or for allegedly backing opposition forces.¹⁶ According to multiple corroborated testimonies, the MI has abducted civilians on the street and in hotels in Juba and other locations in South Sudan, for allegedly supporting the National Salvation Front (NAS), SSUF or the SPLM/A-IO.¹⁷ In addition, the MI has facilitated the extrajudicial detentions of active members of the SPLA-IO deployed to Juba and other locations to participate in the transitional security arrangements prescribed by the R-ARCSS.¹⁸
3. The Panel corroborated that the MI has detained most of these civilians and SPLA-IO personnel at a detention facility in the MI’s section of the SSPDF barracks in Juba, locally known as ‘Giada.’¹⁹
4. The Panel corroborated that MI personnel, acting on direct orders from Maj. Gen. Tueny, have beaten and tortured the Giada detainees in order to force them to pay significant bribes for their release. The MI even has compelled some detainees to sign away titles related to land possessions in Juba and other locations to Maj. Gen. Tueny.²⁰ The Panel also corroborated the poor conditions in Giada facilities. There are no toilet facilities, detainees have been forced to defecate in paper and plastic bags, and there has been extremely limited access to food, which prisoners have had to cook for themselves despite not having firewood.²¹
5. The Panel further verified that the MI tortured to death or executed some detainees who refused to pay for their release. For instance, some detainees were shoved, while still alive, in drums filled with stones, and then thrown into the river to die.²²
6. The Panel corroborated that Aroch Majok is among those kidnapped and detained extrajudicially in Giada. Majok is a civilian who the MI kidnapped with the aim of convincing him to give away a plot of land to Maj. Gen. Tueny. The MI also detained Bec George Anyak, a former State Minister of Finance and Public Service in Eastern Lakes, who was extrajudicially detained in Giada after an attempt to kidnap and kill him in the Panorama hotel on 29 July 2019. Other detainees include a nephew of the former Minister of Defence, Kuol Manyang Juuk, as well as Kuol Abu Alab, Stephen Wani and Buk Akon.²³
7. The Panel also corroborated that Maj. Gen. Tueny, who hails from Yirol and was the governor of Eastern Lakes state from December 2015 to February 2017, violated article 2.1.8 of the R-ARCSS. After the signing of the peace agreement in 2018, Tueny recruited, trained and armed a militia of over 1500 youth who had lived in the cattle camps in Aidor and Wunthou areas of Lakes.²⁴ The MI provided the militia with arms and uniforms on direct orders of Maj. Gen. Tueny.²⁵

¹⁵ See Eye Radio, Kiir names new MI chief, 15 February 2019: <https://eyeradio.org/kiir-names-new-mi-chief/>

¹⁶ Interviews with SSPDF MI operatives, security sector high-ranking officers, civil society, community leaders, confidential sources, in locations withheld; December 2019-February 2020.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ ‘Giada’ in Arabic means ‘military barracks’. Interviews with SSPDF MI personnel, security sector high-ranking officers, civil society, community leaders, confidential sources, in locations withheld; December 2019-February 2020.

²⁰ Ibid.

²¹ Interviews with SSPDF MI personnel, confidential sources, in locations withheld; August 2019-February 2020.

²² The Panel has on its file a list of confirmed individuals executed in Giada facilities by MI personnel under orders from Maj. Gen. Tueny. Interviews with SSPDF MI personnel, security sector officers, civil society, community leaders, confidential sources, in locations withheld; August 2019-February 2020.

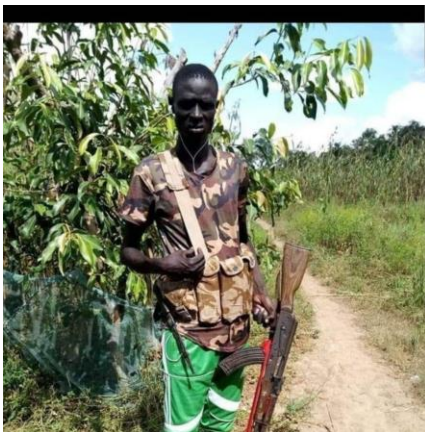
²³ Interviews with SSPDF MI personnel, confidential sources, in location withheld; December 2019-February 2020.

²⁴ Interviews with SSPDF MI personnel, security sector high-ranking officers, civil society, community leaders, confidential sources, in locations withheld; August 2019-February 2020.

²⁵ Ibid.

8. Furthermore, in December 2019 and January 2020, Maj. Gen. Tueny managed to divert MI stocks of ammunition and weapons, including heavy artillery and RPGs,²⁶ to militias under his control in former Southern Liech state (Panyiar), and Eastern Lakes (Wunthou, Adior and Pagarau).²⁷ Multiple corroborated witnesses told the Panel that Tueny stockpiled the weaponry in preparation for a possible offensive into areas inhabited by Nuers in former Southern Liech state, and considered favourable to the SPLM/A-IO.²⁸ In January 2020, Maj. Gen. Tueny also sent one of his sons, Ater Tueny Mabor Deng, with instructors to the training camps mentioned above.²⁹ This action was in contravention of article 2.2.3.2 of the R-ARCSS and the broader transitional security arrangements.
9. In early February 2020, then Eastern Lakes Governor Lieutenant General Mangar Buong Aluenge and Maj. Gen. Tueny agreed to set up a new round of recruitment in former Eastern Lakes State.³⁰ The two also agreed to bring new weapons and ammunitions into the area. As of February 20, the Panel verified that a military training ground had been established in Adior and the plans to distribute weapons and ammunitions continued.³¹ These actions are in contravention of article 2.1.8 of the R-ARCSS.

Maj. Gen. Tueny-controlled militiaman in Wunthou, February 2020



²⁶ The Panel corroborated that at least two 12mm anti-aircraft machines, nine PMKs, and three RPGs were moved from Juba into Eastern Lakes State's locations at that time. Interviews with SSPDF MI personnel, confidential sources, in locations withheld; August 2019-February 2020.

²⁷ See photo.

²⁸ Ibid.

²⁹ Interviews with confidential sources, in locations withheld; August 2019-February 2020.

³⁰ Interviews with government officials, community leaders, confidential sources, in locations withheld; February 2020.

³¹ Ibid.

Maj. Gen. Tueny's militia moving guns to Eastern Lakes



Ater Tueny Mabor Deng travelling to Yirol on a chartered plane with military instructors, January 2020



Ater Tueny Mabor Deng is the first individual on the right side of the picture.

Maj. Gen. Tueny's freshly recruited forces transfer to training camps, Eastern Lakes, February 2020



Annex 4: Violations of the ceasefire in Maiwut county

1. As the Panel reported in its 2019 interim report (see [S/2019/897](#), Annex B), the government exploited political divergences and sub-ethnic tensions to provoke proxy conflicts within the SPLM/A-IO and to weaken the unity of Machar's powerbase.³² In the former Maiwut state (also known as Adar state), government leaders, including Vice President Taban Deng Gai, and NSS and MI senior officers influenced Major General James Ochan Puot's defection, in September 2019, from the SPLA-IO to the government.³³ Subsequently, Ochan formed a Provisional Military and Political Council (PMPC) that took control of Maiwut town and the surrounding areas.³⁴
2. The Panel has further corroborated the government's support for Maj. Gen. Ochan. The government provided Ochan with about \$2 million cash.³⁵ In addition, the SSPDF Military Intelligence (MI) chief, Maj. Gen. Tueny, and the then Governor of former Maiwut state, Bol Ruach Rom, supplied Ochan with weaponry and ammunition from SSPDF bases in Pagak and Nasir, in violation of the Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) signed in December 2017 and of article 2.1.10.4 of the R-ARCSS.³⁶
3. With the aim of mounting an offensive against SPLM/A-IO positions in Turu and Jikou to take over their bases, Maj. Gen. Ochan recruited and trained Cie-Waw ethnic militias, violating article 2.1.8 of the R-ARCSS.³⁷ Maj. Gen. Ochan built a training camp in Maiwut town to train around 1,000 armed men, including child soldiers, in violation of article 2.1.10.3 of the R-ARCSS, under the command of Brigadier General Chuol Yoa Gok.³⁸ Ochan recruited another force of at least 800 militiamen in villages outside Maiwut town, along the river banks of a river locally known as 'Jockier.' To build the militia, Ochan forcibly recruited young men and children by exerting pressure on community chiefs, asking them to either contribute men to his force or donate cows or goats.³⁹
4. On 6 August 2019, Ochan's militia attacked and overran Turu, the SPLA-IO established cantonment site.⁴⁰ In December 2019, Ochan's militia attacked and tried to overrun the SPLM/A-IO headquarters in Jikou. The SPLA-IO repulsed Ochan's forces.⁴¹ Both attacks violated the December 2017 CoHA and article 2.1.10.7.2 of the R-ARCSS. As a consequence of the fighting and the displacement of thousands of people, including into Ethiopia, the Ethiopian National Defense Force (ENDF) and the security forces from Ethiopia's Gambella region strengthened defensive positions on the border.⁴²
5. On 5 January 2020, fighting resumed in Wech Gatluak Rik, a location under the control of the SPLA-IO. The Panel corroborated that Ochan's militia attacked SPLA-IO units transporting food, which led to casualties on both sides, in violation of the December 2017 CoHA and article 2.1.10.7.2 of the R-ARCSS.⁴³

³² Interviews with SSPDF MI personnel, SPLM/A-IO senior commanders and political leaders, SPLM/A-IO Taban Deng Gai faction senior representatives, Cie-Waw Nuer community leaders, elders and civil society, confidential sources, in Juba, Nairobi, Kampala, Addis Ababa and by telephone; August 2019-February 2020.

³³ Ibid.

³⁴ See Provisional Military and Political Council (PMPC) declaration. Ibid.

³⁵ Interviews with Cie-Waw Nuer community leaders, elders and civil society, confidential sources, in Juba, Nairobi, Kampala, and by telephone; December 2019-February 2020.

³⁶ Interviews with SSPDF MI personnel, Cie-Waw Nuer community leaders, elders and civil society, confidential sources, in Juba, Nairobi, Kampala, and by telephone; December 2019-February 2020.

³⁷ Interviews with Cie-Waw Nuer community leaders, elders and civil society, confidential sources, in Juba, Nairobi, Kampala, and by telephone; October 2019-February 2020.

³⁸ Ibid. See photos.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

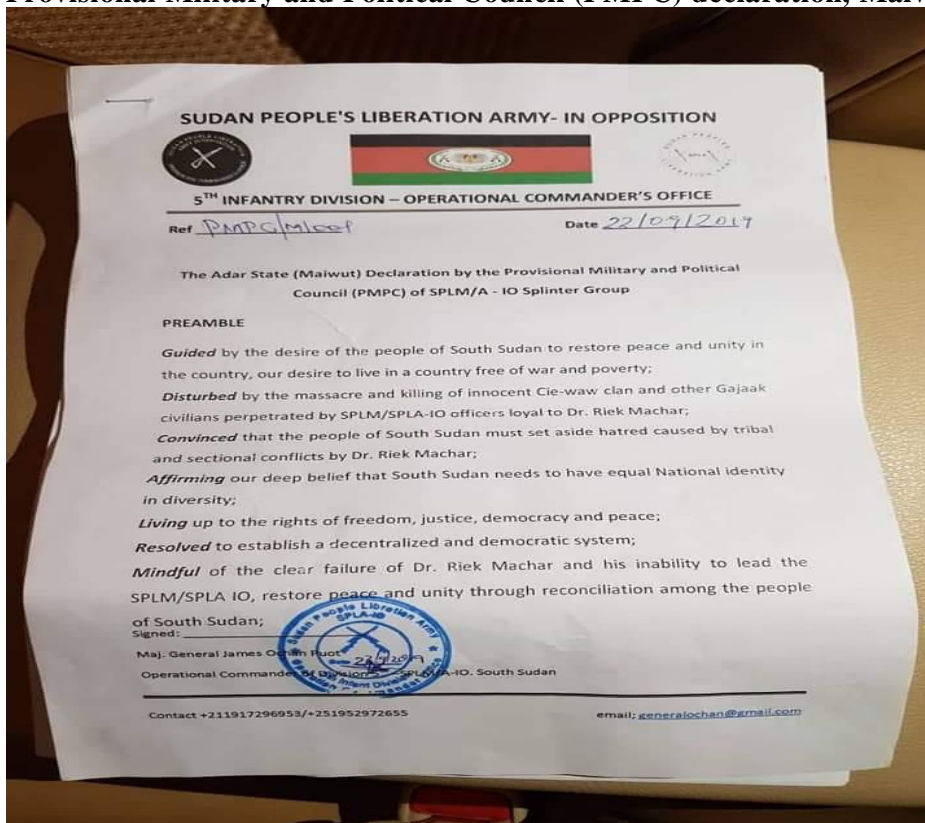
⁴¹ Ibid.

⁴² Interviews with SPLM/A-IO senior commanders and political leaders, Cie-Waw Nuer community leaders, elders and civil society, regional intelligence personnel, confidential sources, in Juba, Nairobi, Kampala, and by telephone; December 2019-February 2020.

⁴³ Interviews with SPLM/A-IO senior commanders and political leaders, Cie-Waw Nuer community leaders, elders and civil society, regional intelligence personnel, confidential sources, in Juba, Nairobi, Kampala, and by telephone; January-February 2020.

6. Since February 2020, only sporadic fighting has been reported. The government ordered both Ochan and Major General James Khor Chol, SPLA-IO Infantry Division 5 commander in charge of former Maiwut state, to Juba for talks aimed at signing a cessation of the hostilities.⁴⁴ During the negotiations, retaliations against the civilian population, mostly those accused of supporting the SPLM/A-IO, continued. The Panel corroborated reports of killings of civilians, sexual and gender-based violence (SGBV), including rapes and maiming of genitals on both men and women and looting, in violation of article 2.1.10.2 and 2.1.10.5 of the R-ARCSS. The PMPC armed militia mostly perpetrated the violence, acting under direct orders of Maj. Gen. James Ochan Puot and Chuol Yoa Gok.⁴⁵
7. On 11 February 2020, the PMPC and the SPLM/A-IO signed an agreement for a permanent ceasefire and a return to the implementation of the R-ARCSS.⁴⁶ Despite the ceasefire declaration, the Panel notes how neither Ochan's militia has been disarmed, nor has there been any cantonment and screening of forces in the former Maiwut state. In particular, the Turu cantonment site for the SPLA-IO was destroyed by Ochan's forces.⁴⁷ Without the disarming and demobilization of forces, the Panel notes the high risk of a resumption of the conflict and violence against the population.⁴⁸ On 19 February 2020, the Panel received information of the killing of two civilians near Jikou by Ochan's militia, in an episode of retaliation against perceived pro-SPLM/A-IO supporters.⁴⁹

Provisional Military and Political Council (PMPC) declaration, Maiwut, 22 September 2019



⁴⁴ Interviews with government representatives, SPLM/A-IO senior commanders and political leaders, Cie-Waw Nuer community leaders, elders and civil society, confidential sources, in Juba, Nairobi, Kampala, and by telephone; January-February 2020.

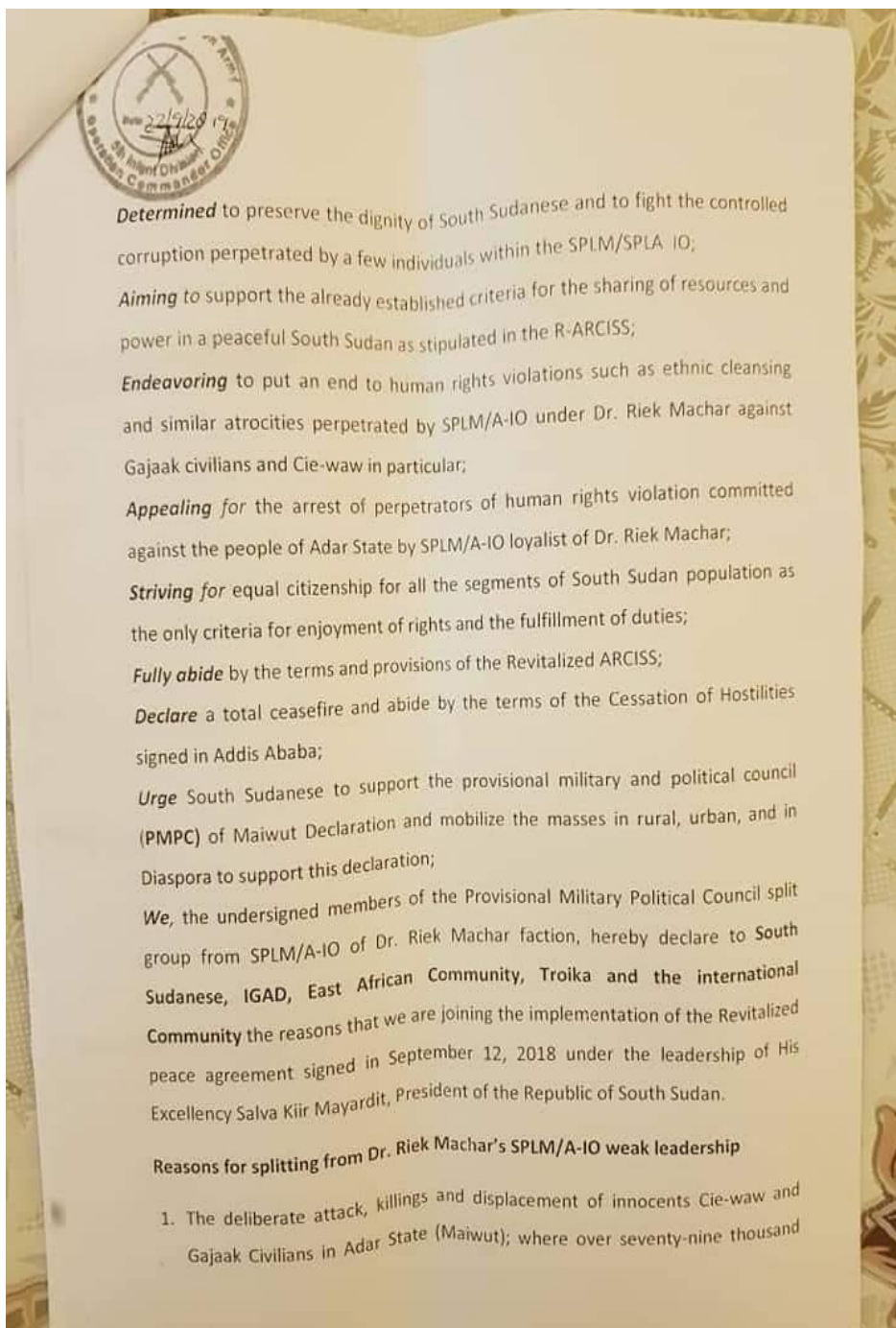
⁴⁵ Interviews with Cie-Waw Nuer community leaders, elders and civil society, NGOs personnel, confidential sources, in Juba, Nairobi, Kampala, and by telephone; January-February 2020.

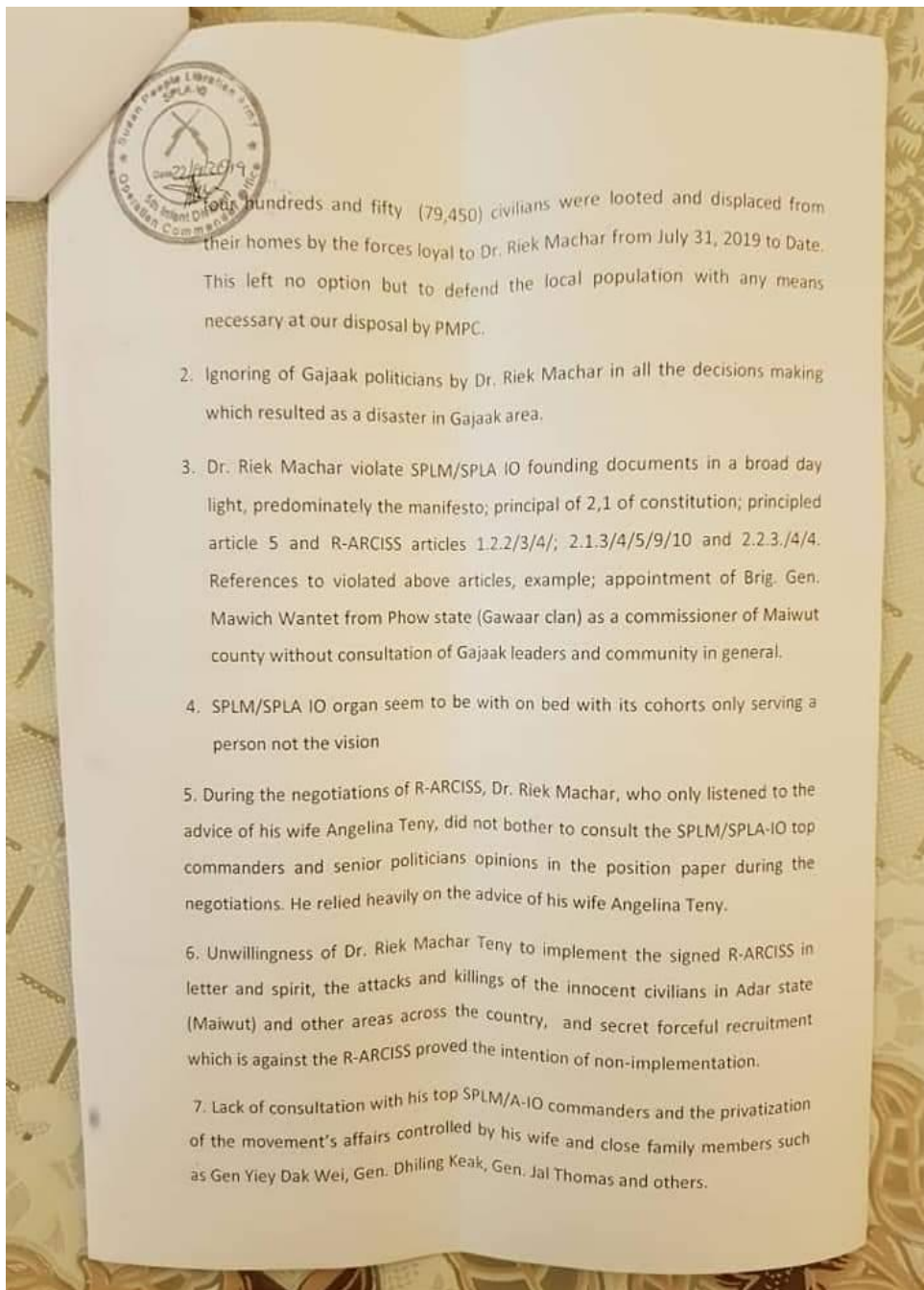
⁴⁶ See Resolution of the Peace and Reconciliation Conference on Maiwut State.

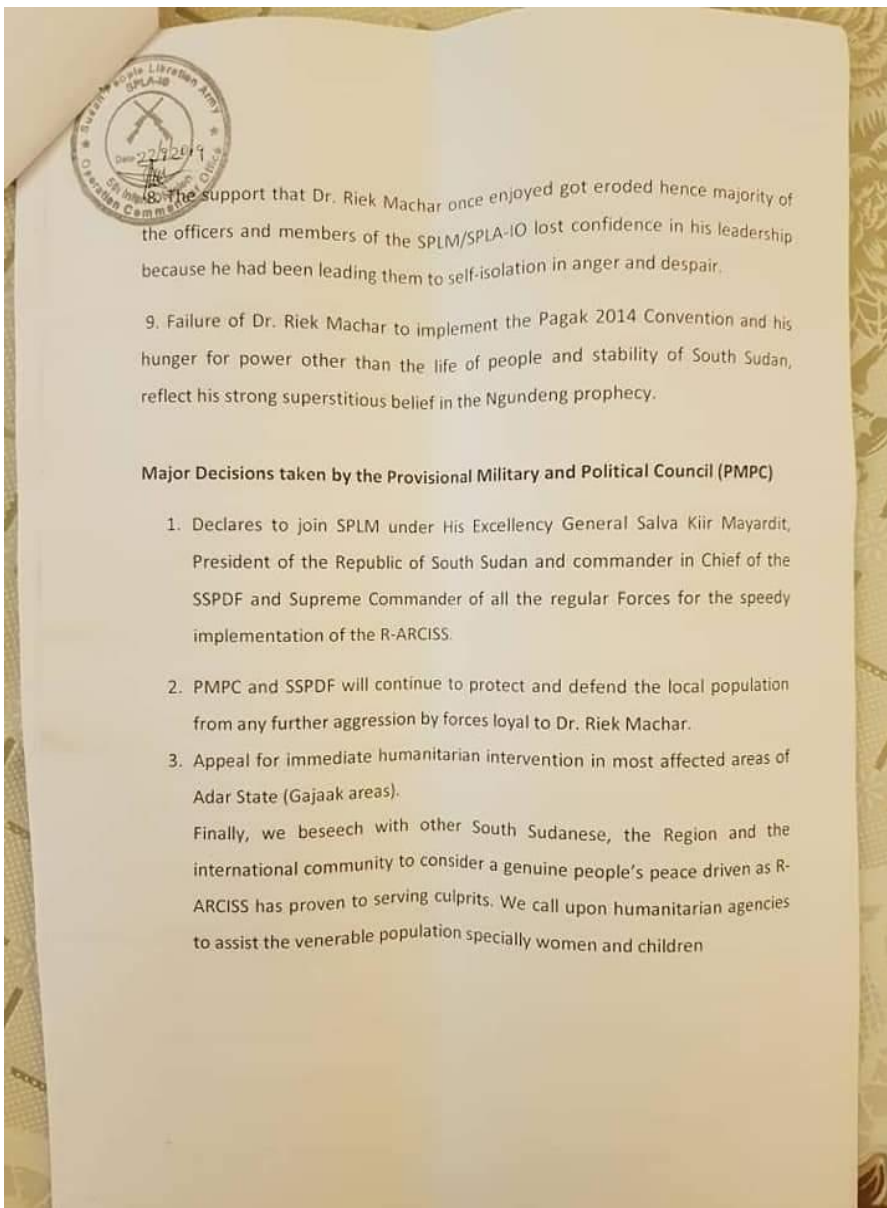
⁴⁷ Interviews with SPLM/A-IO senior commanders and political leaders, community leaders, elders and civil society, confidential sources, in Juba, Nairobi, Kampala, and by telephone; December 2019-February 2020.

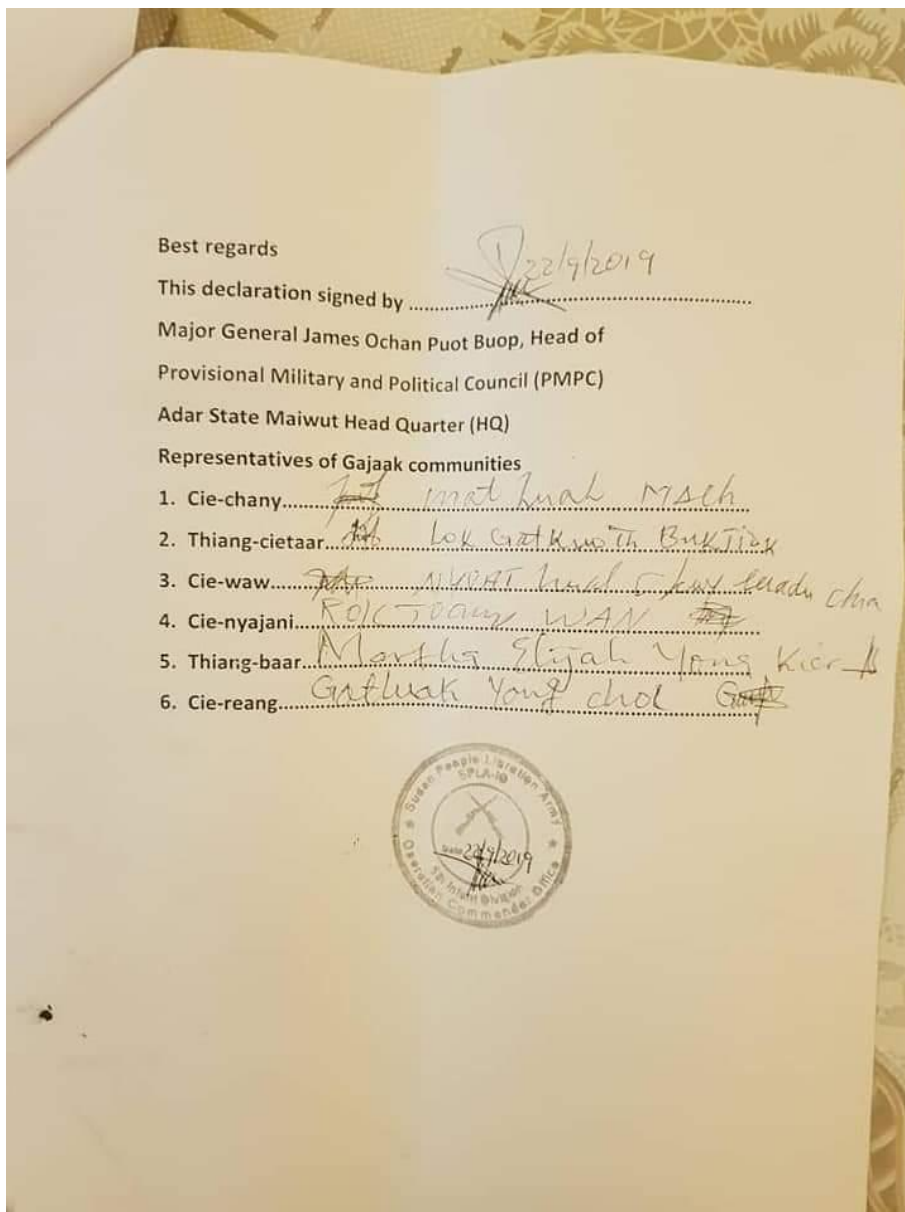
⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Interviews with community leaders, elders and civil society, confidential sources, in Nairobi and by telephone; February 2020.









Maj. Gen. Ochan's militia training centre in Maiwut town



Resolution of the Peace and Reconciliation Conference on Maiwut, Juba, 11 February 2020

February 11, 2020

RESOLUTIONS OF THE PEACE AND RECONCILIATION CONFERENCE BETWEEN THE GOVERNMENT ALLIED FORCES UNDER THE COMMAND OF MAJ. GEN. JAMES OCHAN PUOT IN MAIWUT AND THE SPLM/A (IO) FORCES OF THE 5TH INFANTRY DIVISION IN ADAR STATE BETWEEN FEBRUARY 4 AND 11, 2020 AT THE PREMISES OF THE NATIONAL PRE-TRANSITIONAL COMMITTEE (NPTC) IN JUBA, SOUTH SUDAN

Preamble

We, the Delegations of the Sudan People's Liberation Movement/Army-In Opposition [SPLM/A (IO)] (Jiokow), Adar State and the Provisional Military and Political Council (Maiwut), meeting before the Peace and Reconciliation Committee for the Resolution of the Crisis in Maiwut (PRCRCM), and facilitated by the Joint Defence Board (JDB), at the premises of the National Pre-Transitional Committee (NPTC) between 4th and 11th February 2020:

Aware of the need for the unity of the people of Adar/Maiwut State in particular and the people of South Sudan in general;

Recognizing the efforts and commitment of President of the Republic of South Sudan, Salva Kiir Mayardit and Dr. Riek Machar Teny-Dhurgon, Chairman and Commander-in-Chief of the SPLM/A (IO) to promote peaceful co-existence of our people throughout the country;

Cognizant of the suffering of the people of Adar/Maiwut State as a result of the current violent conflict since July 31, 2019;

Appreciating the contribution by the people of Adar/Maiwut State in the liberation struggles, beginning with the Anya-Nya I, Anya-Nya II and the SPLM/A, leading to the National Independence on July 9, 2011;

Considering the importance of addressing our differences through peaceful means;

Convinced that unity of the people of Adar/Maiwut State is indispensable and paramount to the success of the implementation of the Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan;

Conscious of our duty to create a peaceful atmosphere in which our people can enjoy peace like all other South Sudanese throughout the country;

Considering the importance of promoting peace and harmony among the people of Adar/Maiwut State; and

Convinced that any practice of dividing our people on the basis of clan-ism and hatred for the purpose of acquiring a political status is unacceptable, and that political issues should be resolved without first pitting communities against one another,


Hereby Resolved the following:


1. By signing these resolutions, we, the Parties, declare a permanent ceasefire to be immediately observed throughout Adar/Maiwut State.
2. The Parties are committed to immediately stop fighting to allow reorganization, screening, training and reunification of forces to take place with immediate effect;
3. The Parties are committed to a peaceful resolution of the conflict and reconciliation throughout Adar/Maiwut State;
4. Mobilization for fighting and attacks by either side must stop.
5. Both sides must turn their focus to the implementation of the Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan.
6. There must be a free movement of civil population in and out of both the SPLM/A (IO) and Government controlled areas without escort by either party;
7. There shall be equitable or usual customary sharing of common natural resources by the people of Adar/Maiwut State.
8. South Sudan Relief and Rehabilitation Commission (SRRC) shall assess the need for emergency relief throughout Adar/Maiwut State and provide food and non-food items, and rehabilitate the displaced communities.
9. There shall be reconciliation conferences of the people of Adar/Maiwut State, beginning from Juba, Adar/Maiwut State and to any other place where they may be residing.
10. There shall be established a committee to disseminate these resolutions, monitor and verify allegations reported from either side;
11. Each party shall refrain from responding to violations, and shall instead report to the leadership every violation.
12. R-JMEC and CTSAMVM shall support the peaceful resolution of the conflict in Adar/Maiwut State by facilitating reconciliation conferences.
13. Issues to do with damages during the conflict shall be discussed by the Gaat-Jaak community reconciliation conferences.

In witness to the above resolutions and having understood their content, we, the signatories below, to these Resolutions, hereby agree to bind ourselves to the above Resolutions and shall abide by them.


Signed at the National Pre-Transitional Committee, this Eleventh Day of February 2020.

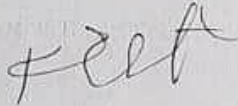
PARTIES:


1. Col. Koang Ruot Ruot Luach
Deputy Governor of Adar State
(Head of the Jikow Delegation)

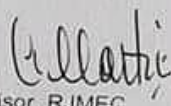

2. Maj. Gen. James Ochan Puot
Leader of the PMPC
(Head of the Maiwut Delegation)

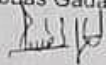
THE COMMITTEE:


1. Lt. Gen. Rin Tueny Mabor
Chair


2. Lt. Gen. Koang Gatkuoth Kerjok
Co-chair

WITNESSES:


1. Colin Martin
Security Advisor, RJMEC


2. Col. Yasir Abbas Gadalla
CTSAMVM

Annex 5: Satellite imagery showing seven of the eight damaged Mi-24s stored at the SSPDF general headquarters, known as Bilpham

North of Juba International Airport, South Sudan Security Council Committee extended pursuant to resolution 2471 (2019) concerning South Sudan



Image Source
 GeoEye-1, 2020-02-15 08:40:31 UTC, (C) COPYRIGHT 2020 DigitalGlobe, Inc.
 UNITED NATIONS Map No.4606.2 (March 2020)

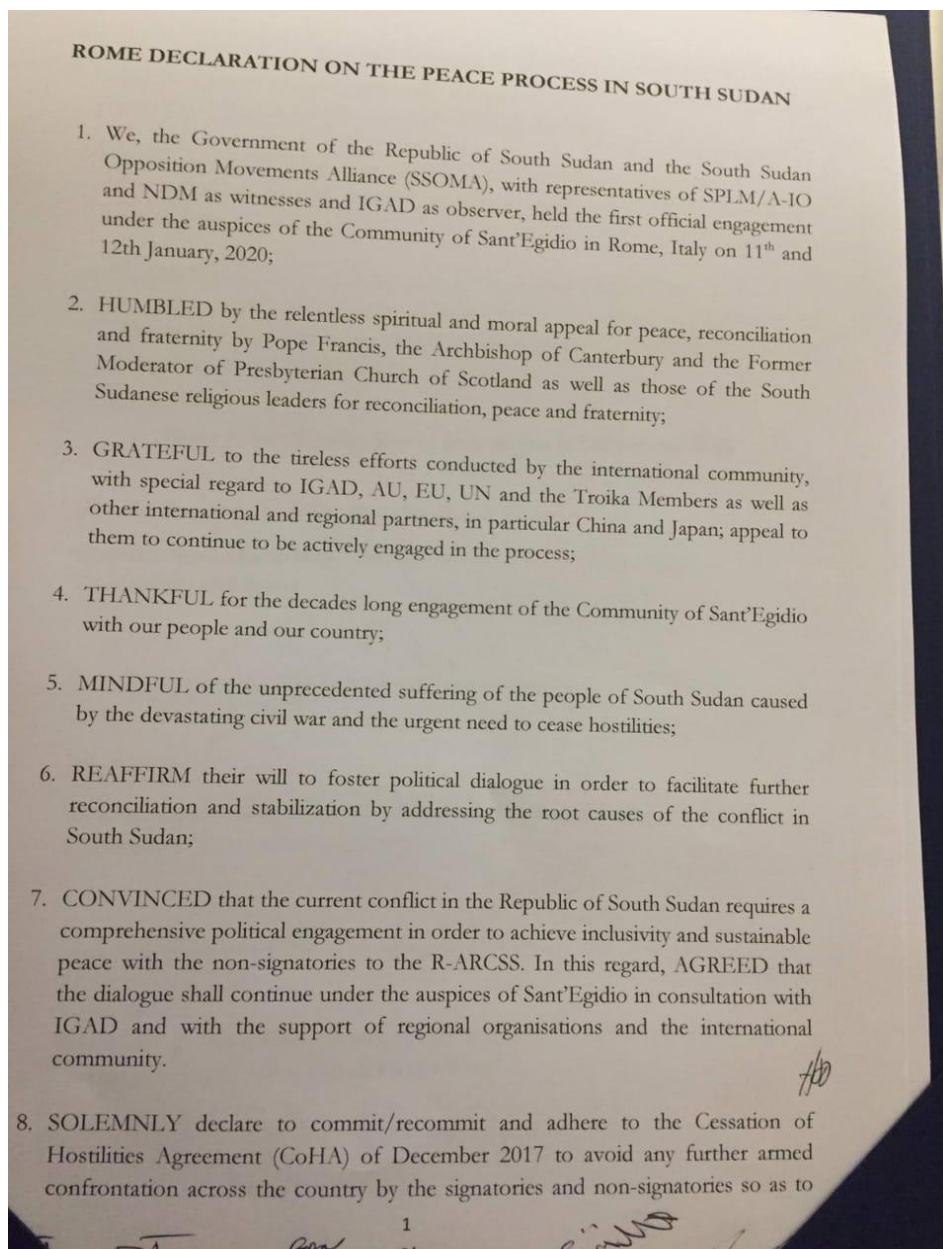
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations
 Office of Information and Communications Technology
 Geospatial Information Section

Annex 6: Third allotment of additional \$40 million transferred to the NPTC

Breakdown of US\$40 million released for Peace Implementation in the 100-Day Extension of the R-ARCSS		
	Allocation (US\$)	Allocation (%)
Funds reportedly released by government (US\$) for R-ARCSS implementation	40,000,000.00	100.00
Total amount directly allocated to security mechanisms (US\$)	16,582,050.00	41.46
Amount retained by the National Pre-Transitional Committee	23,417,950.00	58.54
Implementation Mechanism		
	Allocation (US\$)	Allocation (%)
Joint Defense Board (JDB)	3,500,000.00	8.75
Joint Military Ceasefire Commission (JMCC)	4,000,000.00	10.00
Joint Transitional Security Committee (JTSC)	5,000,000.00	12.50
Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission (DDRC)	2,000,000.00	5.00
Strategic Defense and Security Review Board (SDSRB)	1,100,000.00	2.75
Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring and Verification Mechanism (CTSAMVM) Board	131,250.00	3.75
CTSAMVM Technical Committee (CTC)	275,000.00	0.69
National Constitutional Amendment Committee (NCAC)	315,800.00	0.79
Reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission (RJMEC)	260,000.00	0.65
National Pre-Transitional Committee (NPTC)	23,417,950.00	58.54
Total	40,000,000.00	100.00

Source: Juba Eye, [Online] <https://www.facebook.com/watch/?v=2801382009882723>, [Accessed: December 15, 2019]

Summary by: The Organization for Responsive Governance

Annex 7: Rome Declaration on the Peace Process in South Sudan, Rome, Italy, 12 January 2020

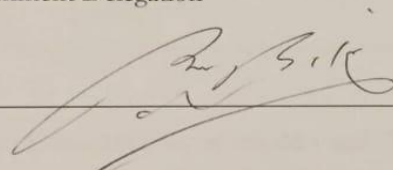
create a conducive environment for dialogue to resolve the conflict. This shall come into effect on the 15th of January 2020 00:00 hours.

9. In this regard, we request the Community of Sant'Egidio to convene a meeting with IGAD, as soon as possible, to discuss issues related to monitoring and verification;
10. RE-AFFIRM readiness to allow continued and uninterrupted humanitarian access to local and international organisations, including non-governmental organisations, to alleviate the suffering of the population, as consequence of years of conflict and natural disasters.

Done in Sant'Egidio, Rome, Italy on the 12th of January 2020

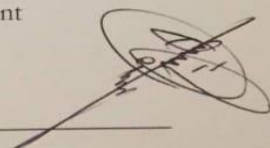
For the Government of the Republic South Sudan

Barnaba Marial Benjamin – Presidential Advisor and Envoy – Head of Government Delegation

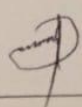



For SSOMA

Thomas Cirillo Swaka, Member of the leadership Council of SSOMA and Chairman of National Salvation Front

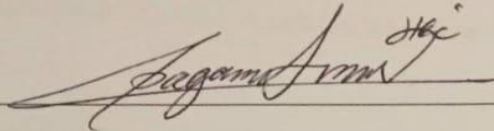


Paul Malong Awan Anei, Member of the leadership Council of SSOMA and Chairman of South Sudan United Front/Army

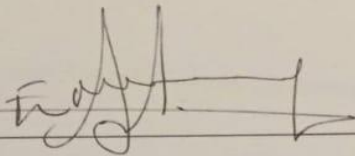





Pa'gan Amum Okiech, Member of the leadership Council of SSOMA and Inter
Chairman of Real-SPLM



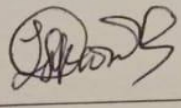
Amanuel Yoanes Yor Akol Ajawin, Interim Secretary General of SSOMA and
Chairman of NDM-PF



David Tut Kuiy, Member of SSOMA, Member of UDRM/A



Vakindi Unvu, Member of SSOMA and Chairman of SSNMC



Witness

Henry Dilah Odwar, SPLM-IO Deputy Chairman

